



**PRIMERA SALA UNITARIA  
EXPEDIENTE: 89/2021**

**GUADALAJARA, JALISCO, A TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.**

**V I S T O S** para resolver en **sentencia definitiva** los autos del juicio administrativo con número de expediente indicado al rubro superior derecho, promovido por [REDACTED], en contra de los TITULARES DE LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE y la SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO, la DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, la DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN y la SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA ENTIDAD.

**R E S U L T A N D O**

**1.** Mediante escrito presentado en esta Primera Sala Unitaria el catorce de enero de la anualidad dos mil veintiuno, [REDACTED] interpuso por su propio derecho, demanda en la vía contenciosa administrativa en contra de las autoridades citadas en el párrafo que antecede, teniéndose como actos impugnados: **A)** las cédulas de notificación de infracción con números de folio 102318835, 117491226, 125731468, 126879329, 154621903, 176131500, 176257806, 220293823, 275146560 y 316629636, así como sus respectivos recargos, actos imputados a los Titulares de la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Seguridad del Estado; **B)** las cédulas de notificación de infracción con números de folio 20070514963, 20070518362, 20080080097 y 20130035175, atribuidas a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara; **C)** la cédula de notificación de infracción con número de folio 2630906202037187, atribuida a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan; y **D)** la determinación del derecho de refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma respecto de los ejercicios fiscales de dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce, dos mil quince, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte, así como sus respectivos recargos y actualizaciones, imputados a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la totalidad de los actos emitidos respecto del vehículo con placas de circulación [REDACTED] del Estado de Jalisco. Dicha demanda se admitió por auto de fecha dos de febrero del citado año.

**2.** A través del mismo acuerdo se admitieron las pruebas ofrecidas, las cuales se tuvieron por desahogadas dada su propia naturaleza, requiriéndose a las autoridades demandadas para que al momento de contestar la demanda exhibieran copias certificadas de los actos que les fueron atribuidos, apercibidas que en caso de no hacerlo se les tendrían por ciertos los hechos que la accionante les imputó; de igual manera, se ordenó emplazar a las enjuiciadas con las copias simples del escrito de cuenta y documentos adjuntos, para que produjeran contestación, apercibidas de las consecuencias legales de no hacerlo.

**3.** Por proveído de fecha catorce de julio de la presente anualidad, se advirtió que la demandada no exhibieron copias certificadas de los documentos que les fueron requeridos, por lo que se les hizo efectivo el apercibimiento correspondiente; por otro lado, se tuvo a la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, al Síndico Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, al Secretario de Transporte del Estado y al Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado produciendo contestación en tiempo y forma a la demanda entablada, admitiéndoles las pruebas ofrecidas, mismas que se tuvieron por desahogadas dada su propia naturaleza; además, se advirtió que la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara no dio contestación a la demanda, no obstante haber sido debidamente emplazada, en consecuencia, se le tuvieron por ciertos los hechos que la parte actora le atribuyó, salvo prueba en contrario.



**PRIMERA SALA UNITARIA**  
**EXPEDIENTE: 89/2021**

4. A través del auto de quince de julio del presente año, en virtud de que no existían pruebas pendientes por desahogar, se concedió a las partes el término legal para que formularan por escrito sus alegatos, sin que ninguna lo hiciera, por lo que se ordenó traer los autos a la vista para dictar la sentencia definitiva correspondiente.

**CONSIDERANDO**

**I.** Esta Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco es competente para conocer y resolver la presente controversia con fundamento en lo dispuesto en los artículos 65 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 4 y 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la citada entidad federativa.

**II.** La existencia de los conceptos controvertidos se encuentra debidamente acreditada con la impresión del adeudo vehicular, el cual obra agregado a fojas 15 a 18 de autos, el cual puede ser consultable a través de la página de internet de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, en el enlace: <https://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/vehicular/adeudo.jsp>, al que se le otorga pleno valor probatorio al tenor de los numerales 406 bis del Código de Procedimientos Civiles y 58 primer párrafo de la Ley de Justicia Administrativa, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, lo anterior por tratarse de información que consta en un medio electrónico oficial, mediante el cual se advierte el número de folio de las infracciones controvertidas, el periodo en que se emitieron y su importe, así como la liquidación del derecho de refrendo anual por los ejercicios fiscales de dos mil once a dos mil veinte.

**III.** El interés jurídico del accionante, quedó colmado con el adeudo vehicular señalado con antelación, concatenado con el recibo oficial con número de folio 17318464, emitida por la Oficina de Recaudación Fiscal número 097 del municipio de Tonalá, de la entonces Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco, en original obra agregado a foja 14 del presente sumario, en los cuales se desprende de manera coincidente el número de placas vehiculares, y se señala en este último al demandante como contribuyente responsable del automotor materia de los actos controvertidos.

**IV.** Toda vez que al contestar la demanda la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, el Secretario de Transporte del Estado y el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado, esgrimieron diversas causales de improcedencia y sobreseimiento, por ser una cuestión de previo pronunciamiento y orden público, en términos de lo dispuesto por el arábigo 30 último párrafo de la ley de la materia, se procede en primer término a su estudio. Por orden y economía procesal, se realizará el estudio de las causales hechas valer por el Secretario de Transporte del Estado y el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado conjuntamente.

**a.** En la primer causal que plantea la representante de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, esgrimió que es improcedente el juicio respecto de la prescripción del derecho de refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma de los ejercicios fiscales de dos mil doce a dos mil quince, ya que en modo alguno es una resolución definitiva, por lo que no procede en su contra el juicio administrativo, sin que exista acto alguno susceptible de ser impugnado, actualizándose la causal de improcedencia y sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 29 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en relación con el artículo 30 fracción I del citado cuerpo normativo.

Esta Sala Unitaria considera infundada la causal de improcedencia reseñada anteriormente con base en los siguientes razonamientos:



Para ello, es menester traer a relación lo que estatuye la tesis jurisprudencial 2a./J. 80/2017 (10a.)<sup>1</sup> citada por la Apoderada General Judicial para Pleitos y Cobranzas del Ayuntamiento de Guadalajara, que es del tenor siguiente:

**"PRESCRIPCIÓN DE UN CRÉDITO FISCAL. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA DE DECLARARLA DE OFICIO, NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.** El artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa establece la competencia de dicho órgano, destacando entre los supuestos de procedencia del juicio, que se trate de resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, como pudieran ser, entre otras, las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos en las que se determine la existencia de una obligación fiscal, las que impongan multas por infracciones a normas administrativas federales o las que causen un agravio en materia fiscal. En ese contexto, la omisión de la autoridad tributaria de declarar de oficio la prescripción de un crédito fiscal no constituye una resolución definitiva, en virtud de que el contribuyente que afirma que aquélla ha operado a su favor, no ha solicitado ante la autoridad administrativa que la declare ni, por ende, existe un acto u omisión de ésta que pueda reputarse como una afirmativa ficta, ni se actualiza agravio alguno en materia fiscal que actualice la procedencia del juicio, sin que ello implique un menoscabo al derecho del contribuyente de plantear aquella situación liberatoria, vía excepción, ante la pretensión de la autoridad de hacer efectivos los créditos fiscales. Esta conclusión es congruente con el derecho de acceso a la justicia, el cual no tiene el alcance de que se actúe sin observancia de los requisitos formales previstos por el legislador.

Contradicción de tesis 404/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Noveno en Materia Administrativa del Primer Circuito y Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito. 26 de abril de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.

Tesis y criterio contendientes:

Tesis XI.1o.A.T.69 A (10a.) y XI.1o.A.T.70 A (10a.), de títulos y subtítulos: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDE, AUN CUANDO SE IMPUGNE UNA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA." y "PRESCRIPCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. UNA VEZ ACTUALIZADA, LEGÍTIMA A LA PERSONA A QUIEN LE BENEFICIA A DEMANDAR SU DECLARATORIA EN EL JUICIO DE NULIDAD, SIN NECESIDAD DE ESPERAR A QUE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA SE PRONUNCIE AL RESPECTO.", aprobadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, y publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de

<sup>1</sup> Página 246, Libro 44, julio de dos mil diecisiete, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable con el número de registro 2014702 en el "IUS" de la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



enero de 2016 a las 10:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 26, Tomo IV, enero de 2016, páginas 3353 y 3387, respectivamente, y El sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 625/2016.

Tesis de jurisprudencia 80/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de junio de dos mil diecisiete.

Esta tesis se publicó el viernes 07 de julio de 2017 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de julio de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Cabe destacar los motivos contenidos en la ejecutoria dictada con motivo de la contradicción de tesis número 404/2016, publicada con fecha siete de julio de dos mil diecisiete en el Semanario Judicial de la Federación, y de la que se desprende en su texto lo siguiente:

“Del contenido de las ejecutorias que han sido reseñadas, se advierte que sí existe la contradicción de tesis que ha sido denunciada.

En efecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 71/2014, hizo referencia a las hipótesis de procedencia del juicio contencioso administrativo, en vinculación con el acto reclamado en el caso sometido a su consideración, consistente en la prescripción de créditos fiscales.

Así, refirió que el juicio contencioso administrativo es procedente contra los actos emitidos por la administración pública enunciados en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (actualmente previstos en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa); que las resoluciones definitivas contra las que era procedente el juicio contencioso administrativo, debían ser entendidas atendiendo a su naturaleza, ya fuera una resolución expresa o ficta, de modo que reflejara el producto final o voluntad definitiva de la administración pública como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, o bien como manifestación aislada que no requería un procedimiento que le antecediera para poder reflejar la última voluntad oficial.

Estableció que, por regla general, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa sólo conocería de aquellos casos que se promovieran en contra de resoluciones definitivas de la Administración Pública Federal previstos en la ley, pero que excepcionalmente el juicio procedería por un no actuar, como lo es una omisión de declarar la prescripción de un crédito fiscal, al resultar éste de estudio oficioso.

Lo anterior, ya que su estudio vía acción jurisdiccional se justificaba, dado que no podía esperarse a que la autoridad exigiera el cobro de un crédito fiscal, aunado a que no era suficiente el reconocimiento de la figura de la prescripción en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, sino que si ésta se actualizaba por el simple transcurso del tiempo, debía declararse de oficio en cualquier estado del proceso, en la instancia administrativa o en la jurisdiccional, al constituir un derecho del gobernado.



Además, que dicho órgano podía estudiar la prescripción sin la necesidad de esperar un acto de la autoridad recaudadora, porque la ausencia de tal resolución nació por el acto omisivo de ésta, quien tenía la obligación de estudiarlo de manera oficiosa.

En el mismo sentido, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 625/2016, procedió a analizar lo relativo a la prescripción en materia tributaria y los mecanismos para que ésta opere; asimismo, hizo referencia a las hipótesis de procedencia del juicio contencioso administrativo.

Al respecto, indicó que la prescripción de los créditos fiscales podrá realizarse de oficio por la autoridad recaudadora o a petición del contribuyente.

Que para el caso de que el contribuyente hubiese solicitado a la autoridad fiscal pronunciarse sobre la prescripción de un crédito fiscal y ésta hubiere sido omisa, el Código Fiscal de la Federación prevé en su artículo 37, un plazo de tres meses para que la autoridad se pronuncie, de lo contrario, se consideraría que se resolvió en sentido negativo; es decir, existe negativa ficta, impugnabile a través del juicio contencioso administrativo.

En ese sentido, refirió que el juicio contencioso administrativo procederá en contra de las resoluciones que configuren la negativa ficta en las que materias señaladas en los preceptos de ley; por el transcurso del tiempo, por regla general en el plazo de tres meses; así como las que así lo dispongan en el ordenamiento jurídico aplicable.

Por tanto -concluyó-, es necesario contar con una resolución definitiva ya sea expresa o configurada como negativa ficta, para poder pedir la nulidad de una negativa de declaración de prescripción de un crédito fiscal, por ende, la omisión de una autoridad fiscal de declarar de oficio la prescripción de un crédito fiscal, no es impugnabile a través del juicio contencioso administrativo.

Del contenido de las ejecutorias que han sido reseñadas, se advierte que en el caso sí se verifica la existencia de la contradicción de tesis que ha sido denunciada, en virtud de que los órganos colegiados contendientes se pronunciaron en torno a un mismo problema jurídico, consistente en determinar si la omisión de declarar de oficio la prescripción de un crédito fiscal es impugnabile el juicio contencioso administrativo.

En efecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito estimó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene competencia para conocer, por regla general, de las demandas de nulidad que se promuevan contra resoluciones definitivas emitidas por la Administración Pública Federal y, por excepción, de aquellas que se interpongan contra un no actuar; por tanto, concluyó que dicho órgano jurisdiccional puede conocer de un juicio de nulidad promovido contra la omisión de declarar, de oficio, la prescripción de un crédito fiscal.

Por su parte, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito partió de la base de que es necesario contar con una resolución definitiva, ya sea expresa o configurada como negativa ficta, para poder reclamar la omisión de la autoridad fiscal de decretar oficiosamente la prescripción de un crédito fiscal; y, por ende, concluyó que el Tribunal Federal





de Justicia Administrativa no tiene competencia para conocer de la impugnación de dicha omisión cuando no existe tal resolución definitiva.

En ese contexto, resulta evidente que existe la divergencia de criterios denunciada, y que se circunscribe a determinar si la omisión de la autoridad tributaria de declarar de oficio la prescripción de un crédito fiscal es impugnabile a través del juicio contencioso administrativo, o bien, si es necesario contar con una resolución definitiva, ya sea expresa o configurada a través de la negativa ficta.

Lo anterior, sin que sea dable considerar que las diferencias entre los hechos suscitados en cada uno de los asuntos analizados por los órganos jurisdiccionales contendientes hayan modificado el punto jurídico analizado por ellos ni constituido el punto de partida para sostener sus criterios, ya que, en ambos casos, las cuestiones fácticas fueron secundarias y, desde un punto de vista estrictamente jurídico, no obstaculizan el análisis de fondo de la contradicción de tesis planteada.

En efecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 71/2014, examinó los siguientes hechos:

- Una persona física promovió juicio de nulidad contra sendas resoluciones emitidas por el Servicio de Administración Tributaria, por medio de las cuales le negaron la condonación de diversos créditos fiscales y le fincaron responsabilidad solidaria en carácter de presidente del consejo de administración de una persona moral a la que le fueron determinados cuatro créditos fiscales; asimismo, la persona física solicitó la prescripción de tales créditos.
- El Magistrado instructor de la Sala Regional del Pacífico Centro del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a la que tocó conocer de la demanda, la desechó por improcedente, en relación con las primeras dos resoluciones, y únicamente la admitió a trámite por lo que hacía a la solicitada prescripción vía excepción; posteriormente, dicha Sala dictó sentencia en la que declaró que había operado la prescripción solicitada.

En cambio, al resolver el amparo directo 625/2016, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó los hechos referidos a continuación:

- Una persona moral promovió juicio de nulidad para obtener la declaratoria de prescripción de un crédito fiscal.
- El Magistrado instructor de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a la que correspondió conocer de la demanda, la desechó por improcedente; luego, inconforme con lo anterior, la persona moral interpuso recurso de reclamación; y, por su parte, la Sala del conocimiento lo declaró infundado.

Ahora, como se advierte de lo expuesto, a pesar de que los órganos jurisdiccionales analizaron, por un lado, una sentencia dictada previa sustanciación del procedimiento respectivo y, por otro lado, una sentencia dictada en un recurso de reclamación promovido contra un auto de



desechamiento; lo cierto es que emitieron su criterio respecto de igual punto jurídico:

- La competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para conocer de una demanda de nulidad promovida para reclamar la declaración de prescripción de diversos créditos fiscales en el supuesto en el que la autoridad fiscal no lo hubiera realizado de oficio, esto es, para conocer de un juicio contencioso administrativo promovido contra la omisión de declarar, de oficio, dicha prescripción.

Además, en ambos casos, la parte actora en el juicio de nulidad reclamó la prescripción de los créditos fiscales justamente porque la autoridad fiscal había sido omisa en decretarla de manera oficiosa; y si bien en el supuesto analizado por el Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito existió una resolución expresa adicional a aquella por la que fueron determinados los créditos fiscales impugnados, ésta no versó acerca de su prescripción, sino de su condonación, de modo que tampoco modificó el punto jurídico señalado.

Por tanto, resulta evidente que la incompatibilidad de las conclusiones a las que arribaron los órganos jurisdiccionales contendientes, no es atribuible a la diferencia entre los hechos suscitados en los asuntos que analizaron; y, consecuentemente, ésta no configura un obstáculo para que pueda actualizarse la oposición de tesis denunciada.

**QUINTO.-** Debe prevalecer, como jurisprudencia, el criterio que sostiene esta Segunda Sala, conforme a las consideraciones que a continuación se exponen:

A fin de resolver la presente contradicción de criterios se estima conveniente tener presente que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la diversa contradicción 50/2004, en sesión de diez de septiembre de dos mil cuatro, abordó el tema de la naturaleza jurídica de la figura de la prescripción, así como su evolución en el Código Fiscal de la Federación y sus particularidades en la materia. De este fallo se advierte lo siguiente:

La palabra prescripción deriva del término latino "prescribere" que significa adquirir un derecho real o extinguirse un derecho o acción de cualquier clase por el transcurso del tiempo en las condiciones previstas por la ley (Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, Madrid, 1992, página 1660).

La prescripción tiene su origen en el derecho civil, y conforme a lo dispuesto por los artículos 1135 y 1136 del Código Civil Federal (anteriormente Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal), se define como el medio de adquirir bienes o liberarse de obligaciones por el simple transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas en la ley, haciendo la distinción el segundo de los preceptos señalados, entre la adquisición de bienes en virtud de la posesión llamada prescripción positiva, y la liberación de obligaciones por no exigirse su cumplimiento que se denomina prescripción negativa.

En materia fiscal no aplica esa distinción debido a que la prescripción sólo se prevé en su modalidad negativa o liberatoria, es decir, como un medio para



que el deudor se libere de una obligación tributaria mediante el transcurso de cierto plazo determinado en la legislación aplicable, esto es, el Código Fiscal de la Federación, ordenamiento en el cual se encuentra regulada la prescripción en los artículos 22 y 146.

El primer numeral prevé la extinción de la obligación del Estado por el transcurso del tiempo, de devolver las cantidades pagadas indebidamente por los contribuyentes por cualquier concepto tributario, cuando éstos no ejercen su derecho de solicitar o exigir su devolución antes de que transcurra el término para que se consuma la prescripción, estableciendo que ésta opera en los mismos términos que tratándose de créditos fiscales.

El segundo precepto -artículo 146- instituye el término de cinco años para la prescripción de los créditos fiscales, entendiendo como tales, conforme al artículo 4o. del Código Fiscal de la Federación, todas aquellas percepciones a que tenga derecho el Estado, provenientes de contribuciones (impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos), de aprovechamientos o sus accesorios, incluyendo los que deriven de responsabilidades que tenga derecho a exigir de sus servidores públicos o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena.

La prescripción fiscal pertenece al derecho sustantivo, pues se refiere a la extinción de una obligación fiscal por el solo transcurso del tiempo determinado en la ley de la materia. El artículo 146 del referido código prevé la posibilidad de que los particulares puedan solicitar la declaratoria de prescripción, vía acción, o bien puedan hacerla valer en el recurso administrativo o medio de defensa legal procedente.

El tenor de dicho numeral, en su texto vigente antes de junio de dos mil seis, es el siguiente:

"Artículo 146. El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años.

"El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos. El término para que se consuma la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor.

"Cuando se suspenda el procedimiento administrativo de ejecución en los términos del artículo 144 de este código, también se suspenderá el plazo de la prescripción.

"Asimismo, se interrumpirá el plazo a que se refiere este artículo cuando el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando hubiere señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal.

"Los particulares podrán solicitar a la autoridad la declaratoria de prescripción de los créditos fiscales."





Dicho precepto fue reformado en su último párrafo, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de junio de dos mil seis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, para quedar en los siguientes términos:

"Artículo 146.

"...

"La declaratoria de prescripción de los créditos fiscales podrá realizarse de oficio por la autoridad recaudadora o a petición del contribuyente."

Conforme al precepto transcrito vigente antes y después de la reforma referida, se advierte, en lo que interesa para efectos de dirimir la materia de la presente contradicción, lo siguiente:

1. El crédito fiscal se extingue por prescripción en el plazo de cinco años.
2. El término para que se actualice la figura jurídica de la prescripción (cinco años), comienza a correr a partir de la fecha en que el pago del crédito fiscal de que se trate pudo ser legalmente exigido, y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos.
3. El plazo para que opere la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto a la existencia de crédito.
4. Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor; de donde deriva que el plazo para que se configure la prescripción puede interrumpirse por dos motivos, a saber: por la gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor; y, por el reconocimiento expreso o tácito del contribuyente deudor respecto de la existencia del crédito.

Asimismo, el legislador a través de la reforma referida otorgó facultades a la autoridad recaudadora para que, de oficio, declare la prescripción de un crédito fiscal o a petición del contribuyente, cuando advierta que se consumó el plazo de cinco años con que contaba para hacerlo exigible.

En consecuencia, del precepto en cita se deduce, en lo que al caso interesa, que el crédito fiscal se extingue por prescripción en el plazo de cinco años y que éste se inicia a partir de la fecha en que su pago pudo ser legalmente exigido, pues constituye una sanción en contra de la autoridad hacendaria por su inactividad derivada de no ejercer su facultad económico coactiva, de modo que bajo esta óptica, para la prescripción de un crédito fiscal sólo se requiere que hayan transcurrido cinco años de forma ininterrumpida, sin que exista gestión de cobro por parte de la autoridad.

En esos términos, de una correcta interpretación del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, se colige que basta que se haya consumado el plazo de cinco años para que se actualice la prescripción del crédito fiscal, aun cuando el deudor no hubiera impugnado un acto de ejecución realizado por la autoridad con posterioridad en que se consumó dicho plazo, es decir, el acto de cobro posterior no puede tener como efecto interrumpir un lapso que ya se ha extinguido, ni implica una renuncia tácita al plazo de prescripción



consumado, pues, como se anticipó, la prescripción constituye una sanción en contra de la autoridad hacendaria por su inactividad derivada de no ejercer su facultad económico coactiva dentro del plazo que le otorga la ley para hacerlo (cinco años).

Esto es, el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación contiene una norma de carácter sustantivo, pues prevé la extinción de los créditos fiscales por el transcurso del tiempo (cinco años). El hecho de que el deudor no hubiera impugnado la gestión de cobro realizada por la autoridad con posterioridad en que se consumó el plazo de la prescripción, no implica la pérdida para hacer valer en vía de acción o de excepción la actualización de la prescripción, ya que por mandato legal la prescripción opera con el solo transcurso del lapso de cinco años, sin que se prevea que los actos de cobro posteriores a que se consumó la prescripción, y que no hubieran sido impugnados, tengan como efecto una renuncia tácita al plazo de prescripción consumado, es decir, transcurrido el plazo de la prescripción no existe posibilidad alguna de interrumpir dicho plazo y, por ende, reanudar el referido plazo, pues no puede interrumpirse algo que se ha extinguido.

Una vez puntualizado lo anterior, se procede a dilucidar, si la omisión de la autoridad de declarar de oficio la prescripción a favor del contribuyente, es impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o bien, si éste, en vez de solicitarla directamente ante la autoridad fiscal, puede incoar, en vía de acción, su declaratoria.

Con tal propósito, es pertinente recordar que dicho órgano puede actuar conforme a dos modelos:

- 1) El contencioso administrativo de anulación, en el que puede declarar la nulidad lisa y llana, cuando pretende restaurar el orden jurídico y únicamente anular el acto impugnado, esto es, controlar la legalidad del acto y tutelar el derecho objetivo; y
- 2) El contencioso administrativo de plena jurisdicción, en el que puede decretar la nulidad para efectos, cuando tiene por objeto tutelar el derecho subjetivo del accionante, mediante el cual no sólo anula el acto, sino que, además, fija los derechos del recurrente y condena a la administración a restablecer y hacer efectivos los derechos que se pretende tutelar.

Como se observa, debido a la diversidad de materias de las que conoce el Tribunal Fiscal de la Federación, el modelo de jurisdicción contencioso administrativo mexicano es mixto, pues dependerá de cada caso en particular, el establecer si su actuación debe ajustarse al modelo contencioso de anulación (para determinar la legalidad del acto administrativo), o bien, al contencioso de plena jurisdicción (para precisar la existencia y medida de un derecho subjetivo).

En relación con ello, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis, que coincide, en lo que interesa al presente asunto, con el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa(6) (actualmente derogada) establece lo siguiente:



"Artículo 3. El tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:  
(se transcribe).

"Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

"El tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, cuando se consideren contrarias a la ley."

El artículo transcrito prevé la posibilidad de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa conozca de los juicios promovidos contra las resoluciones definitivas,(7) es decir, aquellas que no admitan un recurso administrativo en su contra, o bien, aquellas que admitan recursos opcionales.

En ese contexto, a fin de resolver el punto de contradicción precisado en el considerando que antecede, consistente en determinar si la omisión de la autoridad fiscal de declarar de manera oficiosa la prescripción de un crédito fiscal a favor del contribuyente es impugnabile mediante juicio de nulidad, resulta necesario verificar si cumple con tales características de definitividad; y, para ello, conviene destacar lo siguiente:

En primer lugar, que en la medida en que el contribuyente que pretende obtener la prescripción del crédito fiscal a su favor no ha solicitado a la autoridad administrativa que realice la declaración de mérito, no es dable afirmar que exista un actuar por parte de ésta, ni una omisión, que pueda reputarse como una negativa ficta.

En segundo lugar, la Segunda Sala, al examinar el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,(8) que coincide con la redacción actual del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis, delimitó el concepto de "resolución definitiva".

Al respecto, precisó que debe consistir en el producto final o última voluntad de la administración; esto es, la última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, o bien, una manifestación aislada que, por su naturaleza o características, no requiera de procedimientos que le antecedan para poder reflejar esa voluntad definitiva.

En tercer lugar, en tanto cuestión estrechamente vinculada con la definitividad aludida, que no se genera agravio o conflicto alguno para el gobernado, mientras la administración pública no emita esa última voluntad por medio de la autoridad legalmente competente y mientras ésta no adquiera firmeza; esto es, que la calidad de última voluntad firme en combinación con la causación de un agravio objetivo son las características de la resolución definitiva para efectos del juicio contencioso-administrativo.

En suma, se estima pertinente destacar que, para la procedencia del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se requiere que las resoluciones que se pretendan impugnar tengan el carácter de definitivas



y que, por lo mismo, sean el producto final o última voluntad de la autoridad fiscal.

Consecuentemente, resulta evidente que si la autoridad ha omitido declarar de oficio la prescripción a favor del contribuyente, tal situación no agravia a la gobernada, pues, para ello, es menester que ésta eleve una solicitud en ese sentido a la que recaiga una negativa ficta o expresa por parte de la autoridad administrativa de donde se concluya que esa respuesta constituiría en todo caso, la última voluntad de la autoridad fiscal en relación con la petición de la agraviada; y, por ende, sea impugnabile a través del juicio de nulidad, en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Lo anterior, considerando que dicho numeral dispone que el referido tribunal conocerá, entre otros, de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las tres fracciones anteriores del citado numeral, a saber, las siguientes:

- Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación (fracción I);
- Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fijen en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación (fracción II);
- Las que nieguen la devolución de un ingreso indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales (fracción III); y,
- Las que impongan multa por infracción a las normas administrativas federales (fracción IV).

Por tanto, en mérito de lo expuesto, es dable concluir que la omisión de la autoridad fiscal de declarar de manera oficiosa la prescripción de un crédito fiscal no es una resolución definitiva, en tanto no refleja una voluntad definitiva o última por parte de la autoridad fiscal, y tampoco causa un agravio en materia fiscal al contribuyente; y, por tanto, no es impugnabile mediante juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Esta conclusión es congruente con el criterio sustentado por esta Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 196/2006-SS, en la que se interpretó el concepto de "agravio en materia fiscal", a que se refiere la fracción IV del entonces artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa), en las tesis que a continuación se reproducen:

"MATERIA FISCAL. SIGNIFICACIÓN.-Por materia fiscal debe entenderse lo relativo a la determinación, la liquidación, el pago, la devolución, la exención, la prescripción o el control de los créditos fiscales, o lo referente a las sanciones que se impongan con motivo de haberse infringido las leyes tributarias." (Séptima Época. Registro digital: 238493. Instancia: Segunda Sala. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 69, Tercera Parte, materia administrativa, página 51)



"MATERIA FISCAL, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR.-Por materia fiscal debe entenderse todo lo relativo a impuestos o sanciones aplicadas con motivo de la infracción a las leyes que determinan dichos impuestos." (Quinta Época. Registro digital: 332862. Instancia: Segunda Sala. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LIII, materia administrativa, página 3055)

De lo anterior se advierte que la expresión "causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores", establecida en la fracción V del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se refiere a aquellos casos en los que se ocasiona una afectación en la relación jurídico tributaria existente entre el contribuyente y el fisco derivada o relacionada con el cumplimiento de las leyes fiscales, así como a los casos distintos en los que se ocasiona esa afectación por la determinación de una obligación fiscal en cantidad líquida por la negativa a una devolución de ingresos indebidamente percibida por el Estado o cuya devolución proceda conforme a las leyes fiscales, o bien, por la imposición de multas por infracción a las normas administrativas federales.

De este modo, el solo hecho de que haya operado la prescripción a favor del contribuyente sin que la autoridad la haya declarado de oficio o negado con motivo de una solicitud de la gobernada, no actualiza la hipótesis de procedencia del juicio contencioso administrativo, en tanto que, como ha quedado explicitado, esa hipótesis no constituye una resolución que cause agravio en materia fiscal.

No es óbice para la anterior conclusión, el hecho de que el contribuyente pueda plantear vía excepción, que el crédito que la autoridad le demanda, se encuentra prescrito o bien, que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa pueda advertirlo y declararlo oficiosamente.

Tampoco es obstáculo para arribar a la conclusión que se propone, el aspecto atinente a la contravención a los derechos humanos, es de señalar que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado de manera sistemática con el artículo 1o. de la Ley Fundamental, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia.

Ese derecho se integra, a su vez, por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES."

Sin embargo, el derecho a la jurisdicción no puede obligar a estimar procedente el juicio contencioso administrativo de manera irrestricta, puesto que, como quedó precisado, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no prevé limitantes respecto del acceso a la jurisdicción, sino que sujeta la procedencia del juicio contencioso





administrativo a diversas condicionantes, sin que éstas priven de los derechos consagrados en la Constitución Federal.

En el caso, el derecho a la jurisdicción se cumple en la medida que el gobernado puede exigir a los órganos jurisdiccionales del Estado, la tramitación y resolución de los conflictos jurídicos en que sea parte, ello siempre que satisfaga los requisitos fijados por la propia Constitución y las leyes secundarias.

De esta manera, estamos ante un caso en el que no se han actualizado todos los supuestos que establece la ley para que sea procedente el juicio contencioso administrativo, para ello, es necesario cumplir con los requisitos y términos fijados por la ley impugnada; en el caso concreto, dicha condición, se traduce en la existencia de una resolución definitiva susceptible de ser reclamada en la vía contenciosa.

Por ello, únicamente al legislador le corresponde tal función (determinar los plazos y términos en la ley); por tanto, si la intención del legislador, al emitir el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, fue limitar la procedencia del juicio contencioso administrativo a determinadas hipótesis (resoluciones definitivas que causen perjuicio), tal situación por sí sola, de ninguna manera puede estimarse violatoria de los principios previstos por el artículo 17 de la Constitución Federal, ya que el legislador únicamente está ejerciendo la facultad que le fue conferida constitucionalmente.

En consecuencia, debe señalarse que la garantía de acceso a la administración de justicia, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí es observada por el Estado, ya que el hecho de que el juicio contencioso administrativo no sea procedente mientras no se emita una resolución definitiva que cause un agravio fiscal, no implica que, en cualquier caso, el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente.

Es por lo anterior que el simple establecimiento de requisitos o presupuestos necesarios para el estudio de fondo de los conceptos de anulación propuestos en el contencioso administrativo, no constituyen, en sí mismos, una violación al derecho humano de un recurso judicial efectivo, pues, en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados, deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas.

Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier índole, de los recursos internos; de manera que, si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que



importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado.

En atención a las consideraciones que anteceden, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el criterio que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, es el que se precisa a continuación:

PRESCRIPCIÓN DE UN CRÉDITO FISCAL. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA DE DECLARARLA DE OFICIO, NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. El artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa establece la competencia de dicho órgano, destacando entre los supuestos de procedencia del juicio, que se trate de resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, como pudieran ser, entre otras, las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos en las que se determine la existencia de una obligación fiscal, las que impongan multas por infracciones a normas administrativas federales o las que causen un agravio en materia fiscal. En ese contexto, la omisión de la autoridad tributaria de declarar de oficio la prescripción de un crédito fiscal no constituye una resolución definitiva, en virtud de que el contribuyente que afirma que aquélla ha operado a su favor, no ha solicitado ante la autoridad administrativa que la declare ni, por ende, existe un acto u omisión de ésta que pueda reputarse como una afirmativa ficta, ni se actualiza agravio alguno en materia fiscal que actualice la procedencia del juicio, sin que ello implique un menoscabo al derecho del contribuyente de plantear aquella situación liberatoria, vía excepción, ante la pretensión de la autoridad de hacer efectivos los créditos fiscales. Esta conclusión es congruente con el derecho de acceso a la justicia, el cual no tiene el alcance de que se actúe sin observancia de los requisitos formales previstos por el legislador.

Por lo antes expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.- Sí existe la contradicción entre los criterios a que este expediente se refiere, en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de esta resolución.

SEGUNDO.- Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos redactados en el último considerando de esta resolución.

De la anterior tesis jurisprudencial y ejecutoria, se desprende que la **omisión** de la autoridad tributaria de declarar de oficio la prescripción de un crédito fiscal no constituye una resolución definitiva, en virtud de que el contribuyente que afirma que aquélla ha operado a su favor, no ha solicitado ante la autoridad administrativa que la declare ni, por ende, existe un acto u omisión de ésta que pueda reputarse como una afirmativa ficta, ni se actualiza agravio alguno en materia fiscal que actualice la procedencia del juicio.

Esto es, que cuando se reclame el acto omisivo por parte de una autoridad fiscal de declarar de oficio la prescripción de un crédito fiscal, es necesario que el contribuyente haya solicitado ante dicha instancia petición al respecto, ello, con la finalidad de que esa inactividad administrativa adquiera el carácter de una resolución



definitiva, para que sea impugnada ante el Tribunal correspondiente.

Así mismo, se aprecia de tal ejecutoria, que tal requisito no implica un menoscabo al derecho del contribuyente de plantear aquella situación liberatoria, vía excepción, ante la pretensión de la autoridad de hacer efectivos los créditos fiscales, como se actualiza en el caso concreto, ya que en el presente juicio el actor controvierte la determinación contenida tanto en la invitación al pago de adeudos por el derecho de refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma, como en la impresión del adeudo vehicular, en el cual se contiene la liquidación de dicho tributo, misma que es impugnada por sí misma, se conforma a lo dispuesto por el artículo 4, numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, planteando como agravio por la parte del actor, que no puede ser exigida al haberse configurado la prescripción de la obligación de su pago, sin que se esté combatiendo como acto en sí, la omisión por parte de la autoridad fiscal de hacerlo de oficio, lo que sí implicaría que hubiese acudido de manera previa a solicitarla, de ahí la improcedencia de la causal.

**b.** Así mismo, manifestó que en el presente juicio se actualiza la prevista en la fracción IX del artículo 29, en relación con el 30 fracción I, y 1, todos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, debido a que este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco resulta incompetente para conocer la materia de la litis del presente juicio, toda vez que se interpuso en contra de leyes emanadas del Congreso como lo son la Ley de Ingresos y la Ley de Hacienda ambas del Estado de Jalisco.

Es infundada la causal de improcedencia reseñada, con base en los siguientes razonamientos:

Es cierto que este Tribunal no puede pronunciarse directamente sobre la constitucionalidad de preceptos legales sobre los que no exista previo análisis por parte de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y la declaratoria respectiva, aunque sí tiene facultades para dejar de aplicar preceptos que transgreden la norma suprema, en términos de lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por virtud de la reforma al artículo 1 constitucional, de 10 de junio de 2011 dos mil once se rediseñó la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad, pues el mismo ya no es limitativo de los órganos del Poder Judicial de la Federación, a través de los medios legalmente establecidos, sino que ahora, todas las autoridades del país, incluidas las de carácter jurisdiccional, están facultadas y obligadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a observar los derechos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales.

Actualmente existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, siendo éstos:<sup>2</sup>

a) El control constitucional que deben ejercer los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicio de amparo directo e indirecto; y,

<sup>2</sup> Ejecutoria, contradicción de tesis 259/2011. entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados, ambos del Trigésimo Circuito de 30 de noviembre de 2011, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, consultable en la página 380, libro xv, diciembre de 2012, décima época, bajo número de registro 24124.



**PRIMERA SALA UNITARIA  
EXPEDIENTE: 89/2021**

b) El control constitucional que deben ejercer el resto de los Jueces del país sin facultad de declarar la inconstitucionalidad (control difuso) correspondiente a la atribución que tienen todos los órganos jurisdiccionales, en vía de excepción, de estudiar la constitucionalidad de normas generales, especialmente, y omitir su aplicación en un caso concreto o, si se tratare de actos estricto sensu, declarar su nulidad.

En ese contexto, el control difuso de constitucionalidad se ejerce en atención a los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en que el constituyente dotó de atribuciones a los órganos jurisdiccionales para llevarlo a cabo en aras de garantizar el respeto a los derechos humanos de fuente constitucional o convencional; por eso, tal control en su vertiente de constitucionalidad se debe ejercer cuando se advierta la transgresión a los derechos fundamentales.

Luego, las autoridades jurisdiccionales ordinarias no tienen la potestad de hacer declaratoria de inconstitucionalidad de leyes, sino que únicamente están facultadas para la inaplicación de la norma general correspondiente si consideran que no es conforme a la Constitución o a los tratados internacionales.

Encuentra aplicación al caso la tesis P. LXVII/2011<sup>3</sup>, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente:

**“CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.** De conformidad con lo previsto en el artículo [1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos](#), todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso [133](#) para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo [133](#) en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos [103, 105 y 107 de la Constitución](#)), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia.”

<sup>3</sup> Publicada en la página 535 del libro iii, tomo 1, del semanario judicial de la federación y su gaceta, de diciembre de dos mil once, con número de registro 160589, consultada por su voz en el apartado respectivo de la página electrónica [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx)



También sirve de apoyo por las razones que sustenta la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice<sup>4</sup>:

**“CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011).** Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se modificó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad. Con anterioridad a la reforma apuntada, de conformidad con el texto del artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, se entendía que el único órgano facultado para ejercer un control de constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la Federación, a través de los medios establecidos en el propio precepto; no obstante, en virtud del reformado texto del artículo 1o. constitucional, se da otro tipo de control, ya que se estableció que todas las autoridades del Estado mexicano tienen obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el propio Estado mexicano es parte, lo que también comprende el control de convencionalidad. Por tanto, se concluye que en el sistema jurídico mexicano actual, los jueces nacionales tanto federales como del orden común, están facultados para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales, con la limitante de que los jueces nacionales, en los casos que se sometan a su consideración distintos de las vías directas de control previstas en la Norma Fundamental, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, pues únicamente los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la Constitución o los tratados internacionales, mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del Estado mexicano sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.”

De igual forma, es dable destacar que en el control difuso el tema de convencionalidad o constitucionalidad no integra la litis de forma directa, pues la controversia en sí misma se gesta en el ámbito de legalidad, razón por la cual el órgano jurisdiccional sólo podrá desaplicar la norma aun cuando las partes no lo hubiesen alegado.

En tal orden de ideas, si las partes proponen argumentos donde se solicita dicho control, entonces se deberá pronunciar la autoridad cuando su criterio coincida con la propuesta e inaplicará la norma conducente.

Resulta aplicable al tema la jurisprudencia 2a./J. 16/2014 (10a.), registro 2006186, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apreciable en el Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 984, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece:

---

<sup>4</sup> Consultable en la página 420, libro xv, diciembre de 2012, tomo i, décima época, del semanario judicial de la federación y su gaceta.





**“CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO**

**ADMINISTRATIVO.** Si bien es cierto que, acorde con los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades jurisdiccionales ordinarias, para hacer respetar los derechos humanos establecidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pueden inaplicar leyes secundarias, lo que constituye un control difuso de su constitucionalidad y convencionalidad, también lo es que subsiste el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, cuya competencia corresponde en exclusiva al Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. La diferencia entre ambos medios de control (concentrado y difuso), estriba en que, en el primero, la competencia específica de los órganos del Poder Judicial de la Federación encargados de su ejercicio es precisamente el análisis de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, por tanto, la controversia consiste en determinar si la disposición de carácter general impugnada expresamente es o no contraria a la Constitución y a los tratados internacionales, existiendo la obligación de analizar los argumentos que al respecto se aduzcan por las partes; en cambio, en el segundo (control difuso) el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad no integra la litis, pues ésta se limita a la materia de legalidad y, por ello, el juzgador por razón de su función, prescindiendo de todo argumento de las partes, puede desaplicar la norma. Ahora bien, en el juicio contencioso administrativo, la competencia específica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es en materia de legalidad y, por razón de su función jurisdiccional, este tribunal puede ejercer control difuso; sin embargo, si el actor formula conceptos de nulidad expresos, solicitando al tribunal administrativo el ejercicio del control difuso respecto de determinada norma, de existir coincidencia entre lo expresado en el concepto de nulidad y el criterio del tribunal, éste puede inaplicar la disposición respectiva, expresando las razones jurídicas de su decisión, pero si considera que la norma no tiene méritos para ser inaplicada, bastará con que mencione que no advirtió violación alguna de derechos humanos, para que se estime que realizó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias, sin que sea necesario que desarrolle una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, dando respuesta a los argumentos del actor, pues además de que el control difuso no forma parte de su litis natural, obligarlo a realizar el estudio respectivo convierte este control en concentrado o directo, y transforma la competencia genérica del tribunal administrativo en competencia específica. Así, si en el juicio de amparo se aduce la omisión de estudio del concepto de nulidad relativo al ejercicio de control difuso del tribunal ordinario, el juzgador debe declarar ineficaces los conceptos de violación respectivos, pues aun cuando sea cierto que la Sala responsable fue omisa, tal proceder no amerita que se conceda el amparo para que se dicte un nuevo fallo en el que se ocupe de dar respuesta a ese tema, debido a que el Poder Judicial de la Federación tiene competencia primigenia respecto del control de constitucionalidad de normas generales y, por ello, puede abordar su estudio al dictar sentencia. Si, además, en la demanda de amparo se aduce como concepto de violación la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley, el juzgador sopesará declarar inoperantes los conceptos de violación relacionados con el control difuso y analizar los conceptos de violación enderezados a



combatir la constitucionalidad y convencionalidad del precepto en el sistema concentrado.”

En la especie, la demandante solicita un estudio de constitucionalidad, al plantear la contravención de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria establecidos en el artículo 31 fracción IV, Constitucional, sobre tal problemática será el pronunciamiento que se realice en esta sentencia.

**c.** En ese sentido, el referido funcionario público arguyó en su contestación de demanda que se actualiza la hipótesis prevista en el ordinal 29 fracción IX de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en relación directa con el diverso 30 fracción I de dicho ordenamiento, toda vez que la enjuiciante no acredita contar con documento o medio de convicción idóneo con fuerza y valor probatorio pleno con el que demuestre ser la propietaria del vehículo objeto de folio impugnado, y en consecuencia, no se evidencia que el acto administrativo combatido le cause perjuicio a su esfera jurídica.

Esta Sala Unitaria considera que no se actualiza la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad enjuiciada, debido a que de la lectura del sumario en que se actúa se desprende que la accionante presentó en original el recibo oficial con número de folio 17318464 relativa al automóvil con placas de circulación [REDACTED] de la Entidad (que obra agregada a foja 14 de constancias), documento al cual se le otorga pleno valor probatorio al tenor del artículo 399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de aplicación supletoria en relación con lo dispuesto por el numeral 58 párrafos primero y segundo de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, al desprenderse de su contenido que la demandante es contribuyente responsable del automotor materia de los actos controvertidos, razón por la cual sí acredita el interés jurídico con el cual comparece al presente juicio.

**d.** Por otro lado, el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Zapopan refirió que en el presente juicio se actualiza la prevista en la fracción V del artículo 29, en relación con el 30 fracción I, ambos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, debido a que los actos controvertidos ya se están ventilando ante otra Sala Unitaria de éste Tribunal, ya que la parte actora interpuso juicio de nulidad el día 24 de septiembre del 2020 bajo el expediente 2506/2020 en el índice de la Sexta Sala Unitaria del presente tribunal, en contra de la cédula de notificación de infracción con número de folio 2630906202037187; presentándose nuevamente con posterioridad en contra de la misma infracción, bajo el número de expediente 89/2021, llevado por ésta Primera Sala Unitaria.

Es inatendible la causal planteada por la autoridad demandada, toda vez que no exhibió documento alguno tendiente a demostrar que existiese un juicio de nulidad promovido por la misma parte actora y controvirtiendo el mismo acto, por lo que este juzgador no cuenta con los elementos para analizar dicha circunstancia, de ahí que no pueda atenderse la causal.

**e.** El Secretario de Transporte del Estado dijo que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 29 fracción IX, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, pues dice que él no emitió las cédulas de infracción controvertidas, siendo función de la Policía Vial Estatal de la Secretaría de Seguridad, motivo por el cual no le corresponde el carácter de autoridad demandada de acuerdo al supuesto previsto en el arábigo 3, fracción II, inciso a) de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.



**PRIMERA SALA UNITARIA  
EXPEDIENTE: 89/2021**

Por su parte, al Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado esgrimió que no le corresponde el carácter de autoridad demandada de acuerdo al supuesto previsto en el arábigo 3, fracción II, inciso a) de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, toda vez que las cédulas de notificación de infracción impugnadas, fueron realizados en funciones de la Secretaría de Transporte del Estado.

Lo cierto es que, las cédulas de notificación de infracción que aquí se controvierten fueron emitidas algunas por la Secretaría de Transporte, y otras por la Secretaría de Seguridad, es por ello que debe llamárseles a juicio como demandadas, al ser quienes en el caso concreto expidieron las cédulas de notificación de infracción impugnadas.

Además, que no existe precepto legal alguno en la Ley de la materia que estatuya que el juicio debe sobreseerse si la autoridad llamada al mismo no es la que emitió u ordenó la ejecución de los actos que se impugnan; si bien, ello implicaría un problema procesal, en el que tendría que llamarse a la autoridad que los emitió, ordenó o ejecutó, pero nunca sobreseer por tal situación.

**V.** Al no existir otras cuestiones de previo y especial pronunciamiento, se procede al estudio de aquellos conceptos de impugnación que de resultar fundados llevarían a esta Sala Unitaria a declarar la nulidad lisa y llana de las sanciones combatidas por el demandante en términos de lo dispuesto por el arábigo 72 de la ley de la materia.

Es aplicable por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia número I.4o.A. J/44<sup>5</sup>, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala:

**"SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EN ATENCIÓN AL ORDEN QUE SEÑALA EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN, DEBEN ANALIZARSE EN PRIMER LUGAR AQUELLOS QUE LLEVEN A DECLARAR LA NULIDAD MÁS BENÉFICA PARA EL ACTOR.** En el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación se encuentra contenido el principio de exhaustividad de las sentencias en materia fiscal, al imponer a las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la obligación de examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, **iniciando por aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana**, y después por los que se refieran a la omisión de requisitos formales o vicios del procedimiento, lo que se traduce en la obligación de analizar, en primer lugar, los motivos de nulidad que lleven a una declaratoria de nulidad más benéfica para el actor, y sólo en el evento de estimarlos infundados, se pronuncie sobre los conceptos de impugnación que lleven a una declaratoria de nulidad para efectos, bien sea de la llamada comúnmente "del tercer tipo", por versar sobre el ejercicio de facultades discrecionales o, en su caso, para otros efectos."

**VI.** En primer término, este Juzgador analiza **las cédulas de notificación de infracción con números de folio 102318835, 117491226, 125731468, 126879329, 154621903, 176131500, 176257806, 220293823, 275146560**

<sup>5</sup> Publicada en la página 1646 del tomo XXIII de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo de dos mil seis, registro número 174974.



**PRIMERA SALA UNITARIA**  
**EXPEDIENTE: 89/2021**

y **316629636**, atribuidas a los Titulares de la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, **las cédulas de notificación de infracción con números de folio 20070514963, 20070518362, 20080080097 y 20130035175**, atribuidas a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara y **la cédula de notificación de infracción con número de folio 2630906202037187**, atribuida a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan, respecto de las cuales la parte actora expuso en su escrito inicial de demanda que bajo protesta de decir verdad tuvo conocimiento de su existencia, mas no del contenido, por el personal de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado cuando acudió a realizar un trámite, sin que le hubieran sido debidamente notificadas.

Quien esto resuelve, considera que asiste la razón al demandante, ya que al negar **lisa y llanamente** conocer el contenido de los actos descritos con anterioridad, la carga de la prueba sobre la legal existencia por escrito de los mismos, correspondía a las autoridades demandadas a quienes les fue atribuida su emisión, tal y como lo establecen los numerales 286 y 287 fracción I del Código Procesal Civil del Estado de aplicación supletoria a la ley de la materia, a saber:

**“Artículo 286.-** El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el demandado los de sus excepciones...”

**“Artículo 287.-** El que niega sólo está obligado a probar:

**I.** Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho...”

Entonces, al ser los Titulares de la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, así como las Direcciones de Movilidad y Transporte de los Ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan, a las que el demandante imputó los actos controvertidos, debieron acreditar en este juicio su emisión conforme a los requisitos de legalidad contenidos en el numeral 13 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, así como sus constancias de notificación y en ese tópico permitir a la parte actora que ampliara su demanda al respecto. Pero no lo hicieron así, de ahí que no colmaron con su carga probatoria, al no demostrar si los mismos cumplían con los requisitos de validez.

A mayor abundamiento, se considera importante resaltar que el acto administrativo, por regla general, se presume legal, de conformidad con lo dispuesto por los arábigos 14 y 19 de la Ley del Procedimiento Administrativo, 20 y 100 del Código Fiscal, así como el 27 de la Ley de Hacienda Municipal, todos los ordenamientos del Estado de Jalisco; pero lo anterior tiene una excepción, estatuida en los mismos ordinales: cuando el gobernado **niega lisa y llanamente** conocer el acto, sin que la negativa implique la afirmación de otro hecho la autoridad es quien tienen la carga de la prueba, como ocurrió en la especie, caso en el que, como no puede demostrarse un hecho o acontecimiento negativo, la obligación de demostrar si el acto es legal se revierte hacia la autoridad, la cual debe exponerlo, lo que en este caso omitieron las enjuiciadas, debido a que no allegaron al presente juicio copias certificadas de los actos combatidos, como se aprecia de constancias, de ahí que no desvirtuaran la negativa formulada por el demandante al respecto.

Así pues, la omisión procesal referida, provoca que el promovente quede en estado de indefensión al no poder conocer los pormenores y circunstancias contenidas en las sanciones que controvierte, ya que no puede verificar si se sitúa dentro de los supuestos legales que señalaron las autoridades emisoras en ellas; además que resulta evidente que el accionante no puede ejercer su derecho de audiencia y defensa



en contra de las actuaciones que le fueron imputadas, toda vez que nunca le fueron dadas a conocer.

En consecuencia, se actualiza la causal de anulación prevista por los preceptos 74 fracción II y 75 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, siendo procedente **declarar la nulidad lisa y llana de las cédulas de notificación de infracción con números de folio 102318835, 117491226, 125731468, 126879329, 154621903, 176131500, 176257806, 220293823, 275146560 y 316629636**, atribuidas a los Titulares de la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, **las cedulas de notificación de infracción con números de folio 20070514963, 20070518362, 20080080097 y 20130035175**, atribuidas a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara y **la cedula de notificación de infracción con número de folio 2630906202037187**, atribuida a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan.

Apoya lo sentenciado la jurisprudencia número 2a./J. 209/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 188/2007-SS bajo la voz:

**“JUICIO DE NULIDAD. SI EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA DEBE EXHIBIR CONSTANCIA DE ÉSTE Y DE SU NOTIFICACIÓN.”** Si bien es cierto que el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación contiene el principio de presunción de legalidad de los actos y las resoluciones de las autoridades fiscales, también lo es que el propio precepto establece la excepción consistente en que la autoridad debe probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente. De ahí que el artículo 209 bis, fracción II, del indicado Código, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005 (cuyo contenido sustancial reproduce el artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) disponga que, cuando el actor en el juicio contencioso administrativo niegue conocer el acto administrativo impugnado, porque no le fue notificado o lo fue ilegalmente, así lo debe expresar en su demanda, señalando la autoridad a quien atribuye el acto, su notificación o su ejecución, lo que genera la obligación a cargo de la autoridad correspondiente de exhibir al contestar la demanda, constancia del acto administrativo de que se trate y de su notificación, para que el actor tenga oportunidad de combatirlos en la ampliación de la demanda. Lo anterior, porque al establecerse tal obligación para la autoridad administrativa, el legislador previó la existencia de un derecho a favor del contribuyente, a fin de que durante el procedimiento contencioso administrativo se respete su garantía de audiencia y, por ende, los principios de certidumbre y de seguridad jurídica de los que debe gozar, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evitando así que quede sin defensa ante la imposibilidad legal de combatir actos autoritarios de molestia de los que argumenta no tener conocimiento, máxime que según lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar los artículos 207 y 210 del mismo ordenamiento fiscal, el Magistrado instructor, al acordar sobre la admisión del escrito por el que se contesta la demanda de nulidad, debe otorgar a la actora el plazo de 20 días para ampliarla, pues de lo contrario se le dejaría en estado de indefensión al proscribir su derecho a controvertir





aquellas cuestiones que desconoce o que la demandada introduce en su contestación.”

Así mismo, es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 117/2011<sup>6</sup>, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 133/2011 que es del tenor siguiente:

**“JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CUANDO EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO IMPUGNADO, NO ADMITE REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD.** Conforme a la construcción de precedentes iniciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las contradicciones de tesis 188/2007-SS y 326/2010, la regla del artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en una de sus partes, debe interpretarse en el sentido de que, frente al desconocimiento del acto administrativo impugnado por la actora, la obligación de la autoridad demandada de exhibir la constancia de su existencia y de su notificación debe cumplirse sólo en el momento de la contestación de la demanda, sin que sea admisible su requerimiento posterior por el Magistrado instructor. Lo anterior, por un lado, ante la ausencia de disposición normativa expresa que así lo establezca, resultando inaplicable el artículo 21, penúltimo párrafo, en relación con el diverso 15, penúltimo párrafo, del citado ordenamiento, que involucran el tratamiento general de la sustanciación del juicio de nulidad, ajena a la especialidad en que opera aquella regla y, por otro, en respeto a la garantía de audiencia y a los principios de economía e igualdad procesales, que serían incumplidos con una conclusión distinta.”

Igualmente cobra aplicación lo sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 173/2011 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Libro 3, Tomo 4, diciembre de dos mil once, página 2645, con número de registro 160591, de rubro:

**“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO NO SE ACREDITA EN EL JUICIO RESPECTIVO LA EXISTENCIA DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNADAS DEBE DECLARARSE SU NULIDAD LISA Y LLANA.** Ha sido criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que si en el juicio contencioso administrativo federal el actor manifiesta en su demanda desconocer el acto administrativo impugnado, es obligación de la autoridad demandada exhibir constancia de su existencia y de su notificación al momento de contestarla, con la finalidad de que aquél pueda controvertirlas a través de la ampliación correspondiente; por tanto, si la autoridad omite anexar los documentos respectivos en el momento procesal oportuno, es indudable que no se acredita su existencia, omisión que conlleva, por sí, la declaratoria de nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas por carecer de los requisitos de fundamentación y motivación a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

<sup>6</sup> Visible en la página 317 del tomo XXXIV de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil once, consultada por su voz en el “IUS” de la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



**PRIMERA SALA UNITARIA  
EXPEDIENTE: 89/2021**

**VII.** Al resultar ilegales las cédulas de notificación de infracción con números de folio 102318835, 117491226, 125731468, 126879329, 154621903, 176131500, 176257806, 220293823, 275146560 y 316629636, atribuidas a los Titulares de la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, siguen su suerte los actos derivados de las mismas, como lo son sus recargos, lo anterior por tratarse de frutos de actos viciados.

Es aplicable, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito<sup>7</sup> que a la letra dice:

**“ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE.** Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal.”

**VIII.** Luego, se analiza el primer concepto de impugnación expuesto por el promovente en su escrito de demanda, relativo a que la obligación de pago del crédito fiscal derivado del **derecho por refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma respecto de las anualidades de dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince**, se encuentra prescrito, toda vez que a la fecha han pasado cinco años sin que la autoridad haya emitido algún acto de ejecución, tal y como lo establece el artículo 90 del Código Fiscal del Estado de Jalisco.

En principio, como se observa la parte actora hace valer la prescripción de la obligación de pago del derecho de refrendo anual de placas vehiculares y holograma por los ejercicios fiscales de dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, sin embargo, en el caso específico es facultad de este juzgador precisar la figura extintiva que resulte aplicable al caso, cuya dilucidación deriva de los hechos y constancias que conforman la materia de estudio de este sumario, lo que encuentra sustento en la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 565, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, agosto de 2007, de rubro y texto siguiente:

**“PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD EN EL JUICIO DE NULIDAD. CORRESPONDE AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DETERMINAR CUÁL DE ESAS FIGURAS SE ACTUALIZA, CONFORME A LAS ALEGACIONES EXPUESTAS EN LA DEMANDA Y EN LA CONTESTACIÓN.** Las acciones y las excepciones proceden en el juicio aun cuando no se precise su nombre o se les denomine incorrectamente. Por otro lado, conforme al tercer párrafo del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, coincidente con el mismo párrafo del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de

<sup>7</sup> Publicada en la página 280 del tomo 121-126 sexta parte de la séptima época del Semanario Judicial de la Federación, consultada al través del registro 252103 del “IUS” de la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación. En tal virtud, cuando en una demanda de nulidad en vía de acción o de excepción se reclame la configuración de la prescripción o de la caducidad, corresponderá a las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa analizar cuál de esas figuras se actualiza, atendiendo a los hechos contenidos en el escrito de demanda o en la contestación, con la única salvedad de no cambiar o alterar los hechos o alegaciones expresados por los contendientes.

Así, partiendo de la premisa incontrovertible de que en el presente juicio no quedó probada la existencia de gestiones de cobro previos a la emisión de la liquidación de adeudo del crédito fiscal que aquí se controvierte y que exhibe el demandante, referente al derecho de refrendo anual por los años dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, es inconcuso que la figura que en todo caso se estudiará es la caducidad prevista en el ordinal 41, fracción II del Código Fiscal del Estado de Jalisco.

Ahora bien, por cuanto a la caducidad de las facultades de la autoridad fiscal para determinar la obligación fiscal en cantidad líquida, con relación a la determinación del derecho de refrendo anual de placas vehiculares y holograma por los ejercicios fiscales de dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, se precisa lo siguiente:

El arábigo 41 fracción II del Código Fiscal del Estado estatuye:

“Artículo 41.- Las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, se extinguen en el término de cinco años. Dicho término empezará a correr a partir:

II. Al día siguiente al en que debió hacerse el pago del impuesto, derecho o aprovechamiento, si no existiera obligación de presentar declaraciones, manifestaciones o avisos; y...”

Conforme el precepto trasunto las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios caduca en cinco años contados a partir del día siguiente al en que debió hacerse el pago del impuesto, derecho o aprovechamiento, si no existiera obligación de presentar declaraciones, manifestaciones o avisos, como ocurre en el caso concreto.

Así mismo, cabe hacer alusión a lo dispuesto en la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco por el numeral 22, fracción III para la anualidad dos mil once, 24, fracción III para las anualidades de dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, en el que se estipulan los parámetros para determinar la base de la determinación del derecho de refrendo anual de placas vehiculares y holograma. Dichos preceptos establecen a la letra:

**Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal de dos mil once.**

“**Artículo 22.** Por los servicios que preste la Secretaría de Vialidad y Transporte y, en su caso, la Secretaría de Finanzas, se causarán derechos de acuerdo con la tarifa correspondiente:



**III. Por refrendo anual de registro y holograma para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques, para el servicio particular y público, así como motocicletas, incluyendo eléctricos:**

**a) Automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, incluyendo los vehículos eléctricos y remolques: \$400.00**

**b) Motocicletas**

**\$90.00**

c) Placas de Demostración:

**\$1,000.00**

A los pagos efectuados hasta el 31 treinta y uno de marzo de 2011 dos mil once, por concepto del derecho previsto en el inciso a) de esta fracción, se concederá un descuento de 30%.

Cuando se efectúe el pago a partir del 1º primero de abril y hasta el día 31 treinta y uno de mayo de 2011 dos mil once, se concederá un descuento de 15%.

Cuando se efectúe el pago a partir del 1º primero de junio y hasta el 31 treinta y uno de julio de 2011 dos mil once, no causará recargos."

**Ley de ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal de dos mil doce.**

**"Artículo 24.** Por los servicios que preste la Secretaría de Vialidad y Transporte y, en su caso, la Secretaría de Finanzas, se causarán derechos de acuerdo con la tarifa correspondiente:

**III. Por refrendo anual de registro y holograma para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques, para el servicio particular y público, así como motocicletas, incluyendo eléctricos:**

**a) Automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, incluyendo los vehículos eléctricos y remolques: \$416.00**

**b) Motocicletas**

**\$94.00**

c) Placas de Demostración:

**\$1,000.00**

A los pagos efectuados hasta el 31 treinta y uno de marzo de 2012 dos mil doce, por concepto del derecho previsto en el inciso a) de esta fracción, se concederá un descuento de 30%.

Cuando se efectúe el pago a partir del 1º primero de abril y hasta el día 31 treinta y uno de mayo de 2012 dos mil doce, se concederá un descuento de 15%.

Cuando se efectúe el pago a partir del 1º primero de junio y hasta el 31 treinta y uno de julio de 2012 dos mil doce no causará recargos."



**PRIMERA SALA UNITARIA  
EXPEDIENTE: 89/2021**

**Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal de  
dos mil trece.**

**"Artículo 24.** Por los servicios que preste la Secretaría de Vialidad y Transporte y, en su caso, la Secretaría de Finanzas, se causarán derechos de acuerdo con la tarifa correspondiente:

**III. Por refrendo anual de registro y holograma para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques, para el servicio particular y público, así como motocicletas, incluyendo eléctricos:**

**a) Automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, incluyendo los vehículos eléctricos y remolques: \$435.00**

**b) Motocicletas: \$100.00**

c) Placas de Demostración: \$1050.00

A los pagos efectuados hasta el 31 treinta y uno de marzo de 2013 dos mil trece, por concepto del derecho previsto en el inciso a) de esta fracción, se concederá un descuento de 30%.

Cuando se efectúe el pago a partir del 1º primero de abril y hasta el día 31 treinta y uno de mayo de 2013 dos mil trece, se concederá un descuento de 15%.

Cuando se efectúe el pago a partir del 1º primero de junio y hasta el 31 treinta y uno de julio de 2013 dos mil trece no causará recargos."

**Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal de  
dos mil catorce.**

**"Artículo 24.** Por los servicios que preste la Secretaría de Movilidad y, en su caso, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, se causarán derechos de acuerdo con la tarifa correspondiente:

**III. Por refrendo anual de registro y holograma para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques, para el servicio particular y público, así como motocicletas, incluyendo eléctricos:**

**a) Automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, incluyendo los vehículos eléctricos y remolques: \$455.00**

**b) Motocicletas: \$105.00**

c) Placas de Demostración: \$1,153.00

El pago previsto en la presente fracción deberá efectuarse en el periodo comprendido del 2 de enero al último día hábil del mes de marzo de 2014.

A los pagos efectuados hasta el 31 treinta y uno de enero de 2014 dos mil catorce, por concepto del derecho previsto en el inciso a) de esta fracción, se concederá un descuento de 15%.





Cuando se efectúe el pago a partir del 1º primero de febrero y hasta el día 28 veintiocho de febrero de 2014 dos mil catorce, se concederá un descuento de 10%.

Cuando se efectúe el pago a partir del 1º primero de marzo y hasta el 31 treinta y uno de marzo de 2014 dos mil catorce, se concederá un descuento de 5%."

**Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal de dos mil quince.**

**"Artículo 24.** Por los servicios que preste la Secretaría de Movilidad y, en su caso, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, se causarán derechos de acuerdo con la tarifa correspondiente:

**III. Por refrendo anual de registro y holograma para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques, para el servicio particular y público, así como motocicletas, incluyendo eléctricos:**

**a) Automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, incluyendo los vehículos eléctricos y remolques: \$476.00**

**b) Motocicletas: \$111.00**

c) Placas de Demostración: \$1,153.00

El pago previsto en la presente fracción deberá efectuarse en el periodo comprendido del 2 de enero al último día hábil del mes de marzo de 2015.

A los pagos efectuados hasta el 31 treinta y uno de enero de 2015 dos mil quince, por concepto del derecho previsto en el inciso a) de esta fracción, se concederá un descuento de 15%.

Cuando se efectúe el pago a partir del 1º primero de febrero y hasta el día 28 veintiocho de febrero de 2015 dos mil quince, se concederá un descuento de 10%.

Cuando se efectúe el pago a partir del 1º primero de marzo y hasta el 31 treinta y uno de marzo de 2015 dos mil quince, se concederá un descuento de 5%."

De los artículos insertos se desprende, que el citado derecho se puede pagar hasta el 31 treinta y uno de julio por las anualidades de dos mil once, dos mil doce y dos mil trece, mientras que por los periodos de dos mil catorce y dos mil quince hasta el 31 treinta y uno de marzo, sin causar recargos, entonces, es a partir del día siguiente de que la obligación debió cumplirse, es decir, el momento en que se puede exigir su pago, esto es el primero de agosto de los años dos mil once, dos mil doce y dos mil trece, y el primero de abril de dos mil catorce y dos mil quince.

Ahora bien, para concluir a partir de qué fecha debe entenderse que la demandada inicia a conocer de los hechos generadores del incumplimiento de las obligaciones a cargo de los usuarios, se acude por analogía y en lo conducente, a lo que al efecto resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en la novena época la contradicción de tesis número 62/2001-SS,



sustentando la jurisprudencia número 2a./J. 67/2001<sup>8</sup>, cuyos rubro y texto son los siguientes:

**"INFONAVIT. INICIO DEL PLAZO DE CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DEL INSTITUTO PARA DETERMINAR EL IMPORTE DE LAS APORTACIONES, TRATÁNDOSE DE TRABAJADORES INSCRITOS.** El artículo 30, fracción I, párrafo segundo, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, vigente desde el veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y dos, establece que las facultades del instituto para determinar las aportaciones patronales omitidas y sus accesorios, se extinguen en el término de cinco años, no sujeto a interrupción, contado a partir de la fecha en que el propio instituto tenga conocimiento del hecho generador de la obligación. Por otra parte el artículo 35, párrafo primero, de la mencionada ley, **establece que los patrones deben pagar las aportaciones de sus trabajadores inscritos por bimestres vencidos, a más tardar el día diecisiete de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año; por tanto, el plazo para que el patrón pague espontáneamente inicia el día primero y fenece el día diecisiete de dichos meses y, a su vez, el plazo de la caducidad de las facultades del instituto para determinar y liquidar las aportaciones omitidas y sus accesorios empezará a computarse a partir del día dieciocho de los meses indicados, porque hasta entonces puede, válidamente, ejercer esas facultades.** No pasa inadvertido que el referido artículo 35 fue reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, estableciendo que el pago de las aportaciones será por mensualidades vencidas; sin embargo, dicha reforma no ha entrado en vigor, en virtud de que en el artículo sexto transitorio de ese decreto, se estableció que "La periodicidad del pago de las aportaciones y los descuentos a que se refiere el artículo 35, continuará siendo de forma bimestral hasta que en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se establezca que la periodicidad de pagos se realizará mensualmente.", lo cual no ha sucedido, pero cabe precisar que ya sea por bimestres vencidos o por mensualidades, el plazo de caducidad inicia al día siguiente del en que vence el plazo de pago espontáneo."

Aclarado lo anterior, este Juzgador concluye que la autoridad demandada pudo ejercer sus facultades de determinar el derecho de refrendo anual de placas vehiculares y holograma, uno de agosto de los años dos mil once, dos mil doce y dos mil trece, y del uno de abril dos mil catorce y dos mil quince, luego, a la fecha en la parte actora dijo tener conocimiento del adeudo por dicho concepto, esto es, el diecisiete de diciembre del dos mil veinte, la demandada no acreditó que existiese alguna gestión de cobro de la determinación tributaria, ello por las razones ya vertidas con antelación, por lo que al haber transcurrido más de cinco años sin que se le haya liquidado el citado impuesto, se deriva que **caducaron sus facultades para tal propósito, por las anualidades del dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince**, así como sus respectivas actualizaciones y recargos, así como la Multa Estatal por Refrendo Anual Extemporáneo de Tarjeta de Circulación y Holograma por el ejercicio fiscal de dos mil trece y los gastos de ejecución identificados con los números de crédito 13004465337, conforme a lo dispuesto por el artículo 41, fracción II del Código Fiscal del Estado de Jalisco.

<sup>8</sup> Visible en la página 253 del tomo XIV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de dos mil uno, consultada en el IUS 2010



**IX.** Luego, se estudia **la determinación del derecho por refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma relativa a los ejercicios fiscales de dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve**, respecto del cual la parte actora arguyó en el segundo concepto de impugnación que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 31 fracción IV establece que los mexicanos deben contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa, sin embargo, los actos reclamados establecen un costo sustancialmente mayor por el refrendo de automóviles que el previsto para motocicletas sin justificar el trato diferenciado, no obstante que el servicio es el mismo en todos los casos.

Por su parte la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, señaló que es infundado lo expuesto por el accionante, toda vez que, si bien es cierto que la Ley de Ingresos del El Estado de Jalisco para los ejercicios fiscales de 2016 a 2019 prevén cuotas distintas, dicha prestación del servicio de la expedición de refrendo de tarjeta de circulación y holograma para un automóvil o una motocicleta es completamente diverso, ya que implica al Estado un despliegue técnico distinto, en cada hipótesis. Además, dijo que el artículo 23 fracción III de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, no establece tarifas diferenciadas por un mismo servicio, ya que éste prevé la suma que debe enterarse por concepto de refrendo anual y calcomanía de identificación vehicular para automóviles, camiones, tractores automotores y renglones para el servicio particular y público, sin que sea óbice que en la fracción III BIS del citado numeral se prevea la tarifa respecto de motocicletas, toda vez que son servicios distintos, pues en este último caso se excluye del refrendo vehicular la expedición de la calcomanía.

Es fundado el concepto de impugnación reseñado por las razones que a continuación se exponen:

Es menester traer a relación lo establecido en el artículo 24, fracción III, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, vigente para los ejercicios fiscales de dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, el numeral 23, fracción III, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, vigente para los ejercicios fiscales de dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, y el numeral 23 fracciones III inciso a) y III bis, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para la anualidad de dos mil veinte, el cual es del tenor siguiente:

**Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis.**

**"Artículo 24.-** *Por los servicios que preste la Secretaría de Movilidad y, en su caso, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, se causarán derechos de acuerdo con la tarifa correspondiente:*

**III.** *Por refrendo anual y holograma para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques, para el servicio particular y público, así como motocicletas, incluyendo eléctricos:*

**a) Automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, incluyendo los vehículos eléctricos y remolques:**

**\$492.00**

**b) Motocicletas:**

**\$114.00**

**c) Placas de Demostración:**

**\$1,193.00**



*El pago previsto en la presente fracción deberá efectuarse en el periodo comprendido del 2 de enero al último día hábil del mes de marzo de 2016 dos mil dieciséis.*

*A los pagos efectuados hasta el 31 treinta y uno de enero de 2016 dos mil dieciséis, por concepto del derecho previsto en el inciso a) de esta fracción, se concederá un descuento de 15%.*

*Cuando se efectúe el pago a partir del 1º primero de febrero y hasta el día 28 veintiocho de febrero de 2016 dos mil dieciséis, se concederá un descuento de 10%.*

*Cuando se efectúe el pago a partir del 1º primero de marzo y hasta el 31 treinta y uno de marzo de 2016 dos mil dieciséis, se concederá un descuento de 5%."*

**Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio  
fiscal de dos mil diecisiete.**

**"Artículo 24.-** *Por los servicios que preste la Secretaría de Movilidad y, en su caso, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, se causarán derechos de acuerdo con la tarifa correspondiente:*

*III. Por refrendo anual y holograma para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques, para el servicio particular y público, así como motocicletas:*

<b>a) Automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, y remolques:</b>	<b>\$507.00</b>
<b>b) Motocicletas:</b>	<b>\$117.00</b>
c) Placas de Demostración:	\$1,229.00

*Pagarán el 50% por derecho de refrendo anual y holograma para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, remolques y motocicletas, previsto en los incisos a) y b) de esta fracción, cuando se trate de vehículos híbridos.*

*Tratándose de vehículos eléctricos, estarán exentos del pago de derecho de refrendo anual y holograma, previsto en los incisos a) y b) de esta fracción, al 100%.*

*El pago previsto en la presente fracción deberá efectuarse en el periodo comprendido del 2 de enero al último día hábil del mes de marzo de 2017 dos mil diecisiete.*

*A los pagos efectuados hasta el 31 treinta y uno de enero de 2017 dos mil diecisiete, por concepto del derecho previsto en el inciso a) de esta fracción, se concederá un descuento de 10%."*



**Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio  
fiscal de dos mil dieciocho.**

**"Artículo 23.-** *Por los servicios que preste la Secretaría de Movilidad y, en su caso, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, se causarán derechos de acuerdo con la tarifa correspondiente:*

*III. Por refrendo anual y holograma para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques, para el servicio particular y público, así como motocicletas:*

<b>a) Automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, y remolques:</b>	<b>\$522.00</b>
<b>b) Motocicletas:</b>	<b>\$120.00</b>
<b>c) Placas de Demostración:</b>	<b>\$1,229.00</b>

*Tratándose de vehículos híbridos, pagarán el 50% por derecho de refrendo anual y holograma, previsto en los incisos a) y b) de esta fracción.*

*Tratándose de vehículos eléctricos, estarán exentos del pago de derecho de refrendo anual y holograma, previsto en los incisos a) y b) de esta fracción, al 100%.*

*Los propietarios de automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, remolques y motocicletas, que hubieren sido objeto de robo, estarán exentos al 100% del pago de derechos de refrendo anual y holograma previsto en los incisos a) y b) de esta fracción, por el ejercicio en que ocurrió el robo, así como los ejercicios subsecuentes conforme a la fecha de la denuncia correspondiente presentada ante la autoridad competente, que se exhiba ante la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.*

*El pago previsto en la presente fracción deberá efectuarse en el periodo comprendido del 2 de enero al último día hábil del mes de marzo de 2018 dos mil dieciocho.*

*A los pagos efectuados hasta el 31 treinta y uno de enero de 2018 dos mil dieciocho, por concepto del derecho previsto en el inciso a) de esta fracción, se concederá un descuento de 10%.*

*Cuando se efectúe el pago a partir del 1º primero de febrero y hasta el día 28 veintiocho de febrero de 2018 dos mil dieciocho, se concederá un descuento de 5%.*

*Cuando se efectúe el pago a partir del 1º primero de marzo y hasta el 31 treinta y uno de marzo de 2018 dos mil dieciocho, se concederá un descuento de 5%.*

*Cuando los contribuyentes realicen el pago por refrendo anual y holograma para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques, para el servicio particular y público, así como motocicletas; deberán cubrir un monto de \$40.00 para la Cruz Roja Mexicana y al Hogar Cabañas distribuido en partes iguales entre ambas*





*Instituciones. Estarán exentos de este pago los vehículos eléctricos e híbridos.”*

**Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve.**

**"Artículo 23.-** *Por los servicios que preste la Secretaría del Transporte y, en su caso, la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, se causarán derechos de acuerdo con la tarifa correspondiente:*

*III. Por refrendo anual y holograma para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques, para el servicio particular y público, así como motocicletas:*

<b>a) Automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, y remolques:</b>	<b>\$590.00</b>
<b>b) Motocicletas:</b>	<b>\$168.00</b>
c) Placas de Demostración:	\$1,431.00

*Tratándose de vehículos híbridos, pagarán el 50% por derecho de refrendo anual y holograma, previsto en los incisos a) y b) de esta fracción.*

*Tratándose de vehículos eléctricos, estarán exentos del pago de derecho de refrendo anual y holograma, previsto en los incisos a) y b) de esta fracción, al 100%.*

*El pago previsto en la presente fracción deberá efectuarse en el periodo comprendido del 2 de enero al último día hábil del mes de marzo de 2019 dos mil diecinueve.*

*Los propietarios de automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, remolques y motocicletas, que hubieren sido objeto de robo, estarán exentos del pago de derechos de refrendo anual y holograma previsto en los incisos a) y b) de esta fracción, por el ejercicio fiscal en que ocurrió el delito, siempre que el robo hubiere acontecido dentro del periodo de pago a que se refiere el párrafo anterior.*

*A los pagos efectuados hasta el 31 treinta y uno de enero de 2019 dos mil diecinueve, por concepto del derecho previsto en el inciso a) de esta fracción, se concederá un descuento de 10%.*

*Cuando se efectúe el pago a partir del 1º primero de febrero y hasta el día 28 veintiocho de febrero de 2019 dos mil diecinueve, se concederá un descuento de 5%.*

*Cuando se efectúe el pago a partir del 1º primero de marzo y hasta el 31 treinta y uno de marzo de 2019 dos mil diecinueve, se concederá un descuento de 5%.*

*Cuando los contribuyentes realicen el pago por refrendo anual y holograma para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques, para el servicio particular y público, así como motocicletas; deberán cubrir un monto de \$51.00 correspondiendo \$30.00 para la Cruz Roja Mexicana y \$21.00 para el*



*Hogar Cabañas. Estarán exentos de este pago los vehículos eléctricos e híbridos."*

**Ley de Ingresos para el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal de dos mil veinte.**

**"Artículo 23.** *Por los servicios que preste la Secretaría del Transporte y, en su caso, la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, se causarán derechos de acuerdo con la tarifa correspondiente...*

**III.** *Por refrendo anual y calcomanía de identificación vehicular para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques, para el servicio particular y público:*

- a)** *Automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, y remolques servicio particular y público:* **\$649.00**
- b)** *Placas de demostración:* **\$1,574.00**

*Tratándose de la calcomanía de identificación vehicular sus características deberán de cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en la NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de junio de 2016.*

**III Bis.** *Por refrendo anual de motocicletas: \$260.00*

*El refrendo anual para motocicletas sólo incluye la expedición de tarjeta de circulación, sin incluir calcomanía de identificación vehicular."*

Los preceptos citados establecen el costo por el refrendo anual de vehículos automotores; esto es, indica el monto que deben pagar los propietarios de los vehículos por el servicio consistente en la convalidación de la información correspondiente en el Registro Estatal de Movilidad y Transporte. En general, se observa que el artículo aludido estatuye un costo sustancialmente mayor por el refrendo de automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, los vehículos eléctricos, remolques o por placas de demostración que el previsto para las motocicletas.

Entre los conceptos a que se refieren los preceptos invocados con antelación, se encuentra el relativo al "refrendo anual y holograma para automóviles" por la cantidad de \$492.00 (cuatrocientos noventa y dos 00/100 moneda nacional), para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, \$507.00 (quinientos siete pesos 00/100 moneda nacional), para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, \$522.00 (quinientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional) para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, \$590.00 (quinientos noventa pesos 00/100 moneda nacional) para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve y \$649.00 (seiscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional) para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, luego, del análisis de la impresión del adeudo vehicular, mismo que obra agregado en autos a foja 15 a 18 de autos, se desprende que corresponden precisamente a las tarifa prevista en los artículos 23 y 24 fracción III, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para los ejercicios fiscales aludidos, que consigna el pago de refrendo anual y holograma para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques.

De lo anterior se concluye que se encuentra acreditada la aplicación del precepto reclamado, al sustentarse la determinación del derecho en comento en el



**PRIMERA SALA UNITARIA**  
**EXPEDIENTE: 89/2021**

contenido de dichas normas, que corresponden tanto a automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques.

Precisado lo anterior, debe destacarse que los numerales 23 y 24 fracción III incisos a) y b) de la Ley de Ingresos del Estado para los ejercicios fiscales dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, no fueron materia de pronunciamiento sobre su inconstitucionalidad en la ejecutoria emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la contradicción de tesis número 20/2017<sup>9</sup>, en que consideró de manera substancial que los arábigos 22 fracción III de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año dos mil once y el 24 fracción III de la Ley de Ingresos del Estado para los ejercicios fiscales de dos mil doce a dos mil quince no satisface el requisito constitucional de equidad tributaria consignada en la fracción IV del artículo 31 del texto supremo pues no toman en cuenta el "costo de la actividad", basado en el despliegue técnico que el Estado deberá desarrollar para prestar el servicio público de refrendo anual de registro y holograma, tampoco consideran la correspondencia razonable entre ese "costo" y el monto de la cuota a pagar por el servicio análogo para todos los vehículos que describen las normas en cuestión, pero también es evidente, en su revisión textual que estima que contiene el mismo vicio por el cual se consideró que los artículos 22 fracción III de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año dos mil once, y 24 fracción III del ordenamiento referido para los ejercicios fiscales de los años dos mil trece a dos mil quince, transgredían los principios tributarios de proporcionalidad y equidad.

Lo anterior, toda vez que tales numerales y fracciones también muestran una distinción indebida entre contribuyentes como sujetos obligados al pago del derecho de refrendo anual, tarjeta de circulación y holograma, sin que exista una razón que demuestre ese trato diferenciado en función del tipo de vehículo, porque establece un costo mayor para el refrendo anual de registro de automóviles (y otros) que el previsto para las motocicletas, sin que el servicio que realiza la autoridad para otorgarlo justifique tal circunstancia, pues únicamente se limita a la gestión y administración de la información relativa, así como al cobro del referido refrendo.

Luego, por lo que ve a la anualidad de dos mil veinte, debe indicarse que si bien la fracción III bis del ordinal 23 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para ese ejercicio fiscal, establece que el refrendo anual para motocicletas sólo comprende la expedición de tarjeta de circulación, sin incluir calcomanía de identificación vehicular, no obstante, ello, no se justifica el trato diferenciado, subsistiendo el mismo vicio de ilegalidad, ya que tratándose de automóviles prevalece que en el cobro del refrendo, la expedición de tarjeta de circulación y del holograma no atiende al costo del servicio prestado, sin que la autoridad justifique un despliegue técnico en correlación al costo del servicio.

Así, respecto de la citada anualidad de dos mil veinte, debe ponderarse además lo resuelto por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del tercer circuito en la ejecutoria de amparo pronunciada con fecha nueve de febrero de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo directo número 166/2020, en que esencialmente determinó:

---

<sup>9</sup> "DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y HOLOGRAMA. CONSECUENCIAS DE LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL AMPARO DIRECTO DE LOS ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011, Y 24, FRACCIÓN III, DEL ORDENAMIENTO REFERIDO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2012 A 2015, QUE ESTABLECEN SU MONTO." viernes 11 de mayo de 2018, Tesis: PC.III.A. J/42 A (10a.), con número de registro 2016854.



*“no se soslaya que la **fracción III Bis** del precepto impugnado establece que el refrendo anual para motocicletas sólo comprende la expedición de tarjeta de circulación, sin incluir calcomanía de identificación vehicular.*

*Sin embargo, tal circunstancia no subsana el vicio de inconstitucionalidad de la norma, puesto que tratándose de automóviles prevalece que el cobro del refrendo, la expedición de tarjeta de circulación y del holograma no atiende al costo del servicio prestado, sin que la autoridad justifique un despliegue técnico en correlación al costo del servicio, conforme al criterio invocado.*

*Sobre todo porque el hecho de que en el refrendo anual para motocicletas no se incluya la calcomanía de identificación vehicular no es un elemento apto ni determinante para conocer la correlación entre el costo del servicio prestado y el monto de la cuota fija establecida para los automóviles, ya que, aun cuando pudiera relacionarse con los recursos materiales necesarios para la prestación del servicio, se desconoce el costo que representa para el Estado la expedición de esos documentos (tarjeta de circulación y calcomanía de identificación vehicular) y, por ello, es que no se encuentra justificado el trato diferenciado entre las categorías de vehículos.*

*Esto es, a pesar de que en el refrendo de las motocicletas no se incluye la calcomanía de identificación vehicular, sino solo la expedición de tarjeta de circulación, a diferencia de los automóviles que comprende ambos documentos, el vicio de inconstitucionalidad advertido por el Pleno en Materia Administrativa de este Tercer Circuito subsiste porque el servicio prestado directamente por el Estado es simple y no se ve modificado por su objeto (características de los vehículos), en el que se requiere un despliegue técnico limitado a la gestión y administración de datos, similar para todos.*

*De manera que “no incluir” en las motocicletas la calcomanía de identificación vehicular u holograma no es un factor que dé certeza del costo real buscado para fijar cuotas distintas a quienes reciben servicios análogos, pues en la prestación de dicho servicio no varía la actividad substancial que realiza el Estado y con la cuota de menor cuantía válidamente podría cubrirse el costo del servicio incluidos ambos documentos, lo cual significa que la expedición de distintos documentos no implica un despliegue técnico diverso, pues, este consiste, básicamente, en la convalidación del registro, es decir, en la gestión y administración de datos vehiculares que resulta ser el mismo en todos los casos, con independencia de que se trate de diferentes vehículos y de que como consecuencia de dicha convalidación de información se entreguen distintos documentos a los usuarios...”*

Resolución que se invoca como hecho notorio por esta Sala Unitaria de conformidad con el ordinal 292 de la ley adjetiva civil del estado.

A lo anterior encuentra aplicación por analogía la tesis aislada consultable en la página 2187, décima época, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, de rubro y texto siguiente:

**“HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES DE  
LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE**



**SE REGISTRAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).** El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 74/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, junio de 2006, página 963, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.", sostuvo que conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, un hecho notorio en su aspecto jurídico, se conceptúa como cualquier acontecimiento de dominio público que es conocido por todos o por casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que se pronuncie la decisión judicial, el cual no genera duda ni discusión y, por tanto, la ley exime de su prueba. Por otra parte, con la finalidad de estar a la vanguardia en el crecimiento tecnológico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de Judicatura Federal, emitieron el Acuerdo General Conjunto 1/2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil catorce, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, Tomo III, septiembre de 2014, página 2769, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la firel, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, con el objeto de generar una infraestructura suficiente para salvaguardar el derecho fundamental de una administración de justicia pronta, expedita, completa e imparcial, por lo que se implementaron las bases para el uso eficiente de las tecnologías de la información disponibles, con miras a generar en los juicios de amparo certeza a las partes de los mecanismos, mediante los cuales se integra y accede a un expediente electrónico; lo anterior, en congruencia con el contenido de los diversos Acuerdos Generales 29/2007 y 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXVI, septiembre de 2007, página 2831 y XIII, mayo de 2001, página 1303, respectivamente, que determinan el uso obligatorio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, se concluye que las resoluciones de los órganos del Consejo de la Judicatura Federal que se registran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en términos del precepto legal en cita, constituyen un hecho notorio para resolver los juicios de amparo, en tanto genera un conocimiento completo y veraz de la emisión y sentido en que se dictó un auto o una sentencia que, además, son susceptibles de invocarse para decidir en otro asunto lo que en derecho corresponda."

Dicha constatación, incita en la jurisdicción ordinaria en la que se ventila la presente litis, a una problemática en la que, por una parte, como la ha señalado en una época pretérita la Suprema Corte de Justicia de la Nación<sup>10</sup>, no es dable a la jurisdicción contencioso administrativa, en su acepción esencial como depositaria del control de la legalidad de los actos de los órganos de la administración pública, la aplicación analógica *per se* de la jurisprudencia que se ha pronunciado por la inconstitucionalidad de una norma tributaria relativa a un período determinado, a eventos sucesivos aun teniendo el mismo vicio invalidante, lo cual permitiría en una

<sup>10</sup> "JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO DEBE APLICARLA PARA RESOLVER SOBRE LA LEGALIDAD DE UN ACTO FUNDADO EN UNA DISPOSICIÓN DIVERSA A LA DECLARADA INCONSTITUCIONAL, AUN CUANDO REITERE SU CONTENIDO." Página 481, Tomo XXI Mayo de dos mil cinco, tesis 2a./J.54/2005, número de registro 178426.





solución práctica que parte de la misma premisa normativa, arribando a la misma conclusión y efecto respecto de su invalidez.

Sin embargo, el sistema de control de la constitucionalidad que se ha forjado en el ámbito jurídico nacional, distingue el control concentrado, ejercido exclusivamente en la interpretación directa del texto constitucional por los órganos del poder judicial federal, del control difuso que corresponde ejercer ineludiblemente, de acuerdo al artículo 133 que de él emana en relación con numeral primero, a los juzgadores del fuero común.

Apoya lo anterior, la Tesis I.4o.A.18 K (10a.)<sup>11</sup>, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

**"CONTROL DIFUSO. RASGOS DISTINTIVOS DE SU EJERCICIO.** El "sistema difuso" es aquel en el cual el examen de compatibilidad de los actos frente a la Constitución corresponde a todos los órganos jurisdiccionales y lo ejercitan, incidentalmente, en ocasión de la decisión de las causas de su competencia. La lógica de dicho sistema reside en que, a cada caso, debe recaer una resolución conocida como "norma individualizada", la cual se infiere o deduce a partir de la norma general, pero adecuándola o relacionándola con los hechos o circunstancias del caso concreto, por lo que la decisión se compone de un silogismo judicial que se integra por una premisa fáctica determinada por hechos o circunstancias conforme a las cuales, deberá construirse una premisa normativa que otorgue la mejor solución al conflicto, esto es, cuando se ejerce el control difuso se actúa en el problema contingente y propio que impone una comprobación constitucional en el caso debatido; de ahí el efecto de la cosa juzgada -inter partes-. De manera que en este sistema, el juzgador tiene el deber de realizar una interpretación para llegar a un juicio respecto a la constitucionalidad de la decisión que pronuncia en casos concretos. Por tanto, en el supuesto de estimar que la aplicación de cierta disposición, bajo determinadas circunstancias, resulta inconstitucional, sólo puede, en casos extremos, desaplicar tal disposición en el evento concreto, resolviendo como si ésta no existiera. Así, la duda sobre su constitucionalidad siempre debe plantearse en razón de su aplicación en circunstancias particulares, aspecto que marca la diferencia respecto al control concentrado, puesto que, en este último, se cuestiona la inconstitucionalidad de una ley en abstracto; esto es, la propia norma general, pero sin apreciar los hechos concretos del caso ni la regla que rige a casos específicos, sino la ley per se, con generalidad en el pronunciamiento. Finalmente, cabe considerar que el control difuso, entendido como uno de los medios para consolidar la supremacía constitucional, tiende a buscar y conciliar el sentido o interpretación de las normas que conforman la premisa normativa, a fin de conseguir la: a) interpretación conforme en sentido amplio, de acuerdo al bloque de constitucionalidad; b) interpretación conforme en sentido estricto, si hay varios sentidos, debe elegirse el más acorde al bloque de constitucionalidad, esto es, el previsto o pretendido por la Constitución, y sólo cuando esto resulte imposible se deberá; c) inaplicar, en el caso concreto, la disposición que oriente el sentido de la premisa normativa,

<sup>11</sup> Página 1762, Libro XX, mayo de dos mil trece, Tomo 3, décima época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable con el número de registro 2003523 del "IUS" de la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



cuando sea indefectible un determinado sentido, en oposición al pretendido constitucionalmente, siempre en el contexto de los efectos inter partes que apareja este sistema.

Así como la Tesis número 1a. CCLXXXIX/2015 (10a.)<sup>12</sup>, sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, que reza:

**“CONTROL CONCENTRADO Y DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SUS DIFERENCIAS.** De los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad respecto de normas generales por vía de acción está depositado exclusivamente en los órganos del Poder Judicial de la Federación, quienes deciden en forma terminal y definitiva, por medio del análisis exhaustivo de los argumentos que los quejosos propongan en su demanda o en los casos en que proceda la suplencia de la queja, si una disposición es contraria o no a la Constitución Federal y a los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el control difuso que realizan las demás autoridades del país, en el ámbito de su competencia, se ejerce de manera oficiosa, si y sólo si, encuentran sustento para ello, respaldándose en el imperio del cual están investidas para juzgar conforme a la Constitución. Por tanto, el control ordinario que ejercen estas autoridades en su labor cotidiana, es decir, en su competencia específica, se constriñe a establecer la legalidad del asunto sometido a su consideración con base en los hechos, argumentaciones jurídicas, pruebas y alegatos propuestos por las partes, dando cumplimiento a los derechos fundamentales de audiencia, legalidad, debido proceso y acceso a la justicia. Es aquí donde el juzgador ordinario, al aplicar la norma, puede contrastar, de oficio, entre su contenido y los derechos humanos que reconoce el orden jurídico nacional (esto es, realizar el control difuso) en ejercicio de una competencia genérica, sin que la reflexión que realiza el juez común, forme parte de la disputa entre actor y demandado. En ese sentido, la diferencia toral entre los medios de control concentrado y difuso estriba, esencialmente, en que en el primero es decisión del quejoso que el tema de inconstitucionalidad o inconventionalidad de la ley forme parte de la litis, al plantearlo expresamente en su demanda de amparo; mientras que en el segundo, ese tema no integra la litis, que se limita a la materia de legalidad (competencia específica); no obstante, por razón de su función, por decisión propia y prescindiendo de todo argumento de las partes, el juzgador puede desaplicar la norma que a su criterio no sea acorde con la Constitución o con los tratados internacionales en materia de derechos humanos.”

Luego, en el caso concreto, se dan las condiciones para que se realice esta confrontación de la porción normativa ya citada, es decir el 24 fracción III incisos a) y b) de la Ley de Ingresos para los ejercicios fiscales de dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, el 23 fracción III incisos a) y b) de la Ley de Ingresos para los ejercicios fiscales de dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, y el 23 fracciones III inciso a) y III bis, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para la anualidad de dos mil veinte, con el precepto constitucional que contiene las garantías de proporcionalidad y equidad en materia tributaria, es decir, la fracción IV del 31.

<sup>12</sup> Visible en la página 1647 Libro 23, octubre del año dos mil quince, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, consultable con el número de registro 2010143, del “IUS” ya citado.



Ello es así, porque como lo señaló el siguiente criterio, el juicio que nos ocupa reúne los siguientes elementos que habilitan el análisis de constitucionalidad, a saber:

**A)** Que el juzgador tenga competencia legal para resolver el procedimiento o proceso en el que vaya a contrastar una norma.

**B)** Si es a petición de parte, que se proporcionen los elementos mínimos, es decir, debe señalarse con toda claridad cuál es el derecho humano o garantía que se estima infringido, la norma general a contrastar y el agravio que le produce, pues de otra forma, sin soslayar su carácter de concededor del derecho, el juzgador no está obligado a emprender un estudio expreso oficioso de los derechos humanos o preceptos constitucionales o convencionales que se le transcriban, o que de manera genérica se invoquen como pertenecientes al sistema.

**C)** Debe existir aplicación expresa o implícita de la norma, aunque en ciertos casos también puede ejercitarse respecto de normas que, bien sea expresa o implícitamente, deban emplearse para resolver alguna cuestión del procedimiento en el que se actúa.

**D)** La existencia de un perjuicio en quien solicita el control difuso, o bien irrogarlo a cualquiera de las partes cuando se realiza oficiosamente.

**E)** Inexistencia de cosa juzgada respecto del tema en el juicio, pues si el órgano jurisdiccional ya realizó el control difuso, estimando que la norma es constitucional, no puede realizarlo nuevamente, máxime si un juzgador superior ya se pronunció sobre el tema.

**F)** Inexistencia de jurisprudencia obligatoria sobre la constitucionalidad de la norma que emiten los órganos colegiados del Poder Judicial de la Federación, porque de existir, tal criterio debe respetarse, pues el control concentrado rige al control difuso y, la cual no obstante su pronunciamiento y publicación<sup>13</sup>, no comprende el periodo de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para los ejercicios fiscales dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte.

**G)** Inexistencia de criterios vinculantes respecto de la convencionalidad de la norma general, ya que conforme a las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para los tribunales del Estado Mexicano.

Lo establecido, con apoyo en lo que dispone la tesis XXVII.1o.(VIII Región) J/8 (10a.), Libro 1, diciembre del año dos mil trece, tomo II, con número de registro 2005057, bajo la siguiente voz: "CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD EX OFFICIO. SUS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA."

Ahora bien, el concepto de nulidad que hace valer el accionante sobre el tenor, como se estableció en líneas anteriores versó en:

---

<sup>13</sup> Contradicción de tesis 20/2017 número de jurisprudencia PC.III.A. J/41 A (10a.)<sup>13</sup>, publicada con fecha once de mayo de dos mil dieciocho, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, consultable con el número de registro 2016855 del "IUS" de la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



*"Luego de todo lo anteriormente expuesto y del análisis de los actos materia de la presente controversia, encontramos que el costo del Refrendo Anual de registro y holograma de vehículos; sin embargo, establece un costo sustancialmente mayor por el refrendo de automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, los vehículos eléctricos y remolques, que el previsto para las motocicletas.*

*...Por lo tanto, es suscrito considere que los numerales citados realizan una distinción indebida entre contribuyentes, porque establece un costo mayor para el refrendo anual de registro de automóviles que el previsto para las motocicletas, sin que el despliegue técnico que realiza la autoridad para otorgar el servicio justifique el trato diferenciado, pues se limita a la gestión y administración de la información relativa, así como el cobro del refrendo anual, de ahí que esta parte actora considere que no existe razón que justifique el trato diferenciado, si la actividad correspondiente al servicio es el mismo en todos los casos."*

En ese tenor, el criterio de esta Sala Unitaria coincide en su planteamiento jurídico total con lo expresado por el promovente, por lo que refiere esencialmente a que no se satisface el requisito constitucional de equidad tributaria consignada en la fracción IV del artículo 31 del texto supremo, por los ejercicios fiscales de dos mil dieciséis a dos mil veinte, conforme la tarifa diferenciada que se establece en forma invariable en las porciones normativas aludidas, que estatuyen un costo sustancialmente mayor por el refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma de automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, los vehículos eléctricos y remolques que el previsto para las motocicletas, sin que se justifique el costo del servicio proporcionado por el Estado.

No obstante que no resulte aplicable la voz jurisprudencial publicada por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la contradicción de tesis número 20/2017, es dable destacar que de manera esencial consideró que el monto de dicha contribución, mediante un sistema tarifario que no corresponde al sistema especial que rige los principios de proporcionalidad y equidad de los derechos por servicios, no toma en cuenta el "costo de la actividad", basado en el despliegue técnico que el Estado deberá desarrollar para prestar el servicio público de refrendo anual de registro y holograma, tampoco consideran la correspondencia razonable entre ese "costo" y el monto de la cuota a pagar por el servicio análogo para todos los vehículos que describen las normas en cuestión, lo cual resulta indispensable para definir si un derecho por servicio colma o no tales principios tributarios. Por el contrario, las normas generales sujetas a los procesos constitucionales, fijan el cobro de tarifas atendiendo únicamente a factores que en modo alguno proporcionan datos idóneos sobre los trabajos técnicos a realizar como soporte cierto del costo de tal servicio; es decir, las tarifas sólo se establecen en función de los vehículos diferenciados en cuanto a su tipo, dimensiones y uso, a saber: 1. Automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, incluyendo los vehículos eléctricos y remolques, 2. De motocicletas y 3. De placas para demostración.

Así, esta Sala Unitaria arriba al ejercicio del control difuso al caso concreto, al haber analizado los argumentos esgrimidos al respecto por el accionante que han quedado reseñados, y existir convergencia con lo expuesto en esta temática y la postura que ha venido sustentando este órgano jurisdiccional, con relación a que la violación a la norma constitucional aducida trasciende y se refleja por la inequidad del precepto reclamado, razón esencial que provoca **se inaplique el inciso a), fracción III de los numerales 23 y 24 de la Ley de Ingresos para los ejercicios fiscales de dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, dos mil**



**diecinueve y dos mil veinte**, al contravenir lo dispuesto por el numeral 31 fracción Constitucional.

La anterior determinación conforme lo definió a la voz jurisprudencial 2a./J. 16/2014 (10a.)<sup>14</sup>, aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de febrero de dos mil catorce, en contradicción de tesis 336/2013, que reza:

**“CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.** Si bien es cierto que, acorde con los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades jurisdiccionales ordinarias, para hacer respetar los derechos humanos establecidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pueden inaplicar leyes secundarias, lo que constituye un control difuso de su constitucionalidad y convencionalidad, también lo es que subsiste el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, cuya competencia corresponde en exclusiva al Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. La diferencia entre ambos medios de control (concentrado y difuso), estriba en que, en el primero, la competencia específica de los órganos del Poder Judicial de la Federación encargados de su ejercicio es precisamente el análisis de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, por tanto, la controversia consiste en determinar si la disposición de carácter general impugnada expresamente es o no contraria a la Constitución y a los tratados internacionales, existiendo la obligación de analizar los argumentos que al respecto se aduzcan por las partes; en cambio, en el segundo (control difuso) el tema de inconstitucionalidad o inconventionalidad no integra la litis, pues ésta se limita a la materia de legalidad y, por ello, el juzgador por razón de su función, prescindiendo de todo argumento de las partes, puede desaplicar la norma. Ahora bien, en el juicio contencioso administrativo, la competencia específica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es en materia de legalidad y, por razón de su función jurisdiccional, este tribunal puede ejercer control difuso; sin embargo, si el actor formula conceptos de nulidad expresos, solicitando al tribunal administrativo el ejercicio del control difuso respecto de determinada norma, de existir coincidencia entre lo expresado en el concepto de nulidad y el criterio del tribunal, éste puede inaplicar la disposición respectiva, expresando las razones jurídicas de su decisión, pero si considera que la norma no tiene méritos para ser inaplicada, bastará con que mencione que no advirtió violación alguna de derechos humanos, para que se estime que realizó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias, sin que sea necesario que desarrolle una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, dando respuesta a los argumentos del actor, pues además de que el control difuso no forma parte de su litis natural, obligarlo a realizar el estudio respectivo convierte este control en concentrado o directo, y transforma la competencia genérica del tribunal administrativo en competencia específica. Así, si en el juicio de amparo se aduce la omisión de estudio del concepto de nulidad relativo al ejercicio de control difuso del tribunal ordinario, el juzgador debe

<sup>14</sup> Página 984, Libro 5, abril de dos mil catorce, Tomo I, de la época, gaceta y semanario ya citados, número de registro 2006186.





**PRIMERA SALA UNITARIA  
EXPEDIENTE: 89/2021**

declarar ineficaces los conceptos de violación respectivos, pues aun cuando sea cierto que la Sala responsable fue omisa, tal proceder no amerita que se conceda el amparo para que se dicte un nuevo fallo en el que se ocupe de dar respuesta a ese tema, debido a que el Poder Judicial de la Federación tiene competencia primigenia respecto del control de constitucionalidad de normas generales y, por ello, puede abordar su estudio al dictar sentencia. Si, además, en la demanda de amparo se aduce como concepto de violación la inconstitucionalidad o inconveniencia de la ley, el juzgador sopesará declarar inoperantes los conceptos de violación relacionados con el control difuso y analizar los conceptos de violación enderezados a combatir la constitucionalidad y convencionalidad del precepto en el sistema concentrado.

En tal virtud, ante lo fundado de dicho concepto de impugnación, lo procedente es declarar la nulidad de la determinación del derecho de refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma relativo a los años **dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte**, respecto del automotor con placas de circulación [REDACTED] del Estado de Jalisco, **para el efecto de que la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, determine al actor respecto del referido vehículo, el derecho de refrendo anual, tarjeta de circulación y holograma, aplicando la tarifa mínima, establecida para dicha contribución, prevista en los numerales 23 y 24, fracción III, inciso b) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para los ejercicios fiscales de dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, así como en el numeral 23, fracción III bis, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para la anualidad de dos mil veinte, que corresponde a motocicletas.**

Resulta aplicable por analogía, la tesis jurisprudencial PC.III.A. J/42 A (10a.)<sup>15</sup> del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que dice:

**“DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y HOLOGRAMA. CONSECUENCIAS DE LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL AMPARO DIRECTO DE LOS ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011, Y 24, FRACCIÓN III, DEL ORDENAMIENTO REFERIDO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2012 A 2015, QUE ESTABLECEN SU MONTO.** El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, considera que los preceptos legales indicados violan los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto prevén el monto de derechos por concepto del servicio que preste la Secretaría de Vialidad y Transporte y, en su caso, la Secretaría de Finanzas, relativo al refrendo anual de registro y holograma. En congruencia con ese criterio, y con el fin de imprimirle mayor seguridad jurídica, atento a lo previsto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, resulta necesario precisar las consecuencias jurídicas que conlleva la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas generales citadas, cuando se impugnan en amparo directo, con motivo de su aplicación en

<sup>15</sup> Publicada con fecha once de mayo de dos mil dieciocho, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, consultable con el número de registro 2016854 del “IUS” de la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



una sentencia definitiva que declaró la validez legal de los créditos fundados en tales preceptos, a saber: I. El tribunal responsable deberá dejar insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar, emitir una nueva en la que decrete la nulidad de los créditos fiscales por los conceptos indicados, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2011 a 2015, respecto del vehículo propiedad del quejoso; y, II. Los efectos de dicha nulidad deberán de atender al vicio de inconstitucionalidad detectado, ordenando a la autoridad administrativa demandada que emita una nueva resolución en la que inaplique la porción normativa que resultó contraria al texto constitucional, empero, vinculándola a cuantificar los derechos por esos servicios en función de la tarifa más baja. En adición a ello, es menester precisar de manera enunciativa, que el otorgamiento del amparo en esos términos, no podría tener el alcance de impedir la aplicación presente o futura de las disposiciones mencionadas en perjuicio del quejoso, ni servir de sustento para anular u obtener la devolución de sumas pagadas como consecuencia de actos diferentes, sean previos o posteriores a los créditos indicados.”

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

Contradicción de tesis 20/2017. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y los Tribunales Colegiados Primero, Tercero, Cuarto y Quinto, todos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 11 de diciembre de 2017. Mayoría de seis votos de los Magistrados Juan José Rosales Sánchez, René Olvera Gamboa, Elías H. Banda Aguilar, Marcos García José, Óscar Naranjo Ahumada y Juan Manuel Rochín Guevara. Disidente: Filemón Haro Solís. Ponente: Juan José Rosales Sánchez. Secretario: Carlos Abraham Domínguez Montero.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 575/2016, el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 246/2015, el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver los amparos directos 555/2014 y 312/2016, el sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver los amparos directos 384/2016 y 659/2016, y el diverso sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 646/2016.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de mayo de 2018 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de mayo de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

**X.** Al resultar ilegal la determinación del derecho de refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma relativo a los ejercicios fiscales de dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil diecinueve, siguen su suerte los actos derivados de la misma como lo son las actualizaciones y recargos generados con motivo de ese derecho, ello por tratarse de frutos de actos viciados.

Es aplicable, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en



**PRIMERA SALA UNITARIA  
EXPEDIENTE: 89/2021**

Materia Administrativa del Primer Circuito<sup>16</sup>, con el rubro, "**ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE.**" Transcrita con antelación.

En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los 73, 74 fracciones I y II, 75 fracciones I y II, y 76 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, es de resolverse conforme a los siguientes:

**R E S O L U T I V O S**

**PRIMERO.** Esta Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco es competente para tramitar y resolver este juicio.

**SEGUNDO.** Resultaron infundadas las causales de improcedencia planteadas por la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, el Secretario de Transporte del Estado y el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado, por lo tanto, no es de sobreseerse ni se sobresee el presente proceso.

**TERCERO.** La parte actora probó los hechos constitutivos de su acción y las enjuiciadas no acreditaron sus excepciones, por lo tanto;

**CUARTO.** Se declara que operó la caducidad de las facultades de la autoridad fiscal para determinar el derecho por refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma **por los ejercicios fiscales de dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince**, con relación al vehículo con placas de circulación [REDACTED] del Estado de Jalisco, en consecuencia, **se declara la nulidad lisa y llana** del crédito fiscal por dicho concepto y periodo, así como sus respectivos recargos y actualizaciones, por los motivos y consideraciones vertidas en el presente fallo.

**QUINTO.** Se declara la nulidad de la determinación del derecho de refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma por los periodos de dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte, respecto del vehículo con placas de circulación [REDACTED] del Estado de Jalisco, **para el efecto de que la Secretaría de la Hacienda Pública, determine al actor respecto del referido vehículo, el derecho de refrendo anual, tarjeta de circulación y holograma, aplicando la tarifa mínima, establecida para dicha contribución, prevista en los numerales 23 y 24, fracciones III, inciso b) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para los ejercicios fiscales de dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, así como en el numeral 23, fracción III bis, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para la anualidad de dos mil veinte, que corresponde a motocicletas.**

**SEXTO.** Se declara la nulidad lisa y llana de los actos administrativos controvertidos, consistentes en: **A)** las cédulas de notificación de infracción con números de folio 102318835, 117491226, 125731468, 126879329, 154621903, 176131500, 176257806, 220293823, 275146560 y 316629636, así como sus respectivos recargos, actos imputados a los Titulares de la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Seguridad del Estado; **B)** las cédulas de notificación de infracción con números de folio 20070514963, 20070518362, 20080080097 y 20130035175,

<sup>16</sup> Publicada en la página 280 del tomo 121-126 sexta parte de la séptima época del Semanario Judicial de la Federación, consultada al través del registro 252103 del "IUS" de la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



**PRIMERA SALA UNITARIA**  
**EXPEDIENTE: 89/2021**

atribuidas a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara; **C)** la cedula de notificación de infracción con número de folio 2630906202037187, atribuida a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan; y **D)** los recargos y actualizaciones generados respecto de la determinación del derecho de refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma respecto de los ejercicios fiscales de dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte, imputados a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la totalidad de los actos emitidos respecto del vehículo con placas de circulación [REDACTED] del Estado de Jalisco.

**SÉPTIMO.** Se ordena a la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco efectúen la cancelación de las sanciones descritas en el inciso **A)** del resolutivo que antecede, emitiendo el acuerdo correspondiente, además que deberán realizar las anotaciones conducentes en su base de datos, informando y acreditando todo ello a esta Primera Sala Unitaria.

**OCTAVO.** Se ordena a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara efectúe la cancelación de las cédulas de notificación de infracción descritas en el inciso **B)** del resolutivo sexto de la presente resolución, emitiendo el acuerdo correspondiente, además que deberá realizar las anotaciones conducentes en su base de datos, informando y acreditando todo ello a esta Primera Sala Unitaria.

**NOVENO.** Se ordena a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan efectúe la cancelación de la cédula de infracción descritas en el inciso **C)** del resolutivo sexto de la presente resolución, emitiendo el acuerdo correspondiente, además que deberá realizar las anotaciones conducentes en su base de datos, informando y acreditando todo ello a esta Primera Sala Unitaria.

**DÉCIMO.** Se ordena a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco efectúe la cancelación de los actos descritos en el resolutivo cuarto, así como los señalados en el inciso **D)** del resolutivo sexto de la presente resolución, emitiendo el acuerdo correspondiente, además que deberá realizar las anotaciones conducentes en su base de datos, informando y acreditando todo ello a esta Primera Sala Unitaria.

**NOTIFÍQUESE POR BOLETÍN A LA PARTE ACTORA Y POR BOLETÍN ELECTRÓNICO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.**

Así lo resolvió el Magistrado **HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ**, Presidente de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, actuando ante la Secretario, Licenciada **Anna Stephanie Vera López**, quien autoriza y da fe. -----

HLH/ASVL/jrh

*“La Sala o Ponencia que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; Cuadragésimo Octavo, Cuadragésimo Noveno y Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información*



**PRIMERA SALA UNITARIA**  
**EXPEDIENTE: 89/2021**

*Pública del Estado de Jalisco; Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia (nombre del actor, representante legal, domicilio de la parte actora, etc.), información considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente.”*